

POPULISMO PENAL: EL FIN DE LA RAZÓN

POR JOHN PRATT Y MICHELLE MIAO

LOS AUTORES

John Pratt

LLB (Hons) (Universidad de Londres), MA (Universidad Keele), PhD (Universidad de Sheffield).

Miembro de la Royal Society of New Zealand.

Profesor de Criminología, Victoria University of Wellington, Wellington, Nueva Zelanda.

Correo electrónico: john.pratt@vuw.ac.nz

John Pratt es profesor de Criminología en el Instituto de Criminología de la Universidad Victoria de Wellington, en Nueva Zelanda. Sus calificaciones son LLB (Hons) (Londres), MA (Keele), y PhD (Sheffield). Sus campos de investigación son la penología comparativa y la historia y la sociología del castigo. Ha publicado en once idiomas y ha sido invitado a dar conferencias en universidades de América del Sur, América del Norte, Europa, Asia y Australia. Sus libros incluyen *Punishment and Civilization* (2002), *Penal Populism* (2007) y *Contrasts in Punishment* (2013). En el 2008 fue galardonado con la Sociedad Real de Nueva Zelanda James Cook Research Fellowship en Ciencias Sociales. En el 2009 fue galardonado con el Premio Sir Leon Radzinowicz por el Consejo Editorial del *British Journal of Criminology*. En el 2010 fue invitado a tomar una beca de un año en el Instituto Straus de Estudios Avanzados en Derecho y Justicia, Universidad de Nueva York. En 2012 fue elegido para una beca de la Real Sociedad de Nueva Zelanda. En el 2013 fue galardonado con la Medalla Mason Durie de la Sociedad, dada al «preeminente científico social de la nación».

Michelle Miao

LLB (Universidad de China Oriental de Ciencia Política y Derecho, Shanghai), LL.M (Universidad Renmin, China), LL.M (Universidad de Nueva York), DPhil (Universidad de Oxford).

Profesora asistente de Derecho, Universidad China de Hong Kong, Hong Kong, China.

Correo electrónico: michellemiao@cuhk.edu.hk

Michelle Miao es profesora asistente en la Facultad de Derecho de la Universidad China de Hong Kong. Sus titulaciones son LLB (LLM), LLM (Universidad de Renmin, China), LLM (Universidad de Nueva York), DPhil (Universidad de Oxford) y sus intereses de investigación son las intersecciones entre los dominios de la criminología, los derechos humanos, los estudios sociolegales y el derecho internacional. Antes de su nombramiento en la Universidad China de Hong Kong fue becaria postdoctoral de la Academia Británica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nottingham y becaria Global Research en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. Antes de eso fue investigadora de la Howard League en la Universidad de Oxford y ha publicado sus investigaciones en prestigiosas revistas internacionales, entre ellas el *British Journal of Criminology* y *Theoretical Criminology*.

SUMARIO

Introducción

Castigo, razón y anti-razón

Una explicación al populismo penal

Déficits de legitimidad y el ascenso de la política populista

El fin

RESUMEN

El populismo penal se ha convertido en un aspecto muy discutido del castigo en la sociedad moderna. La mayoría de estos comentarios, sin embargo, adoptan una visión bastante miope y consideran este fenómeno como un evento localizado dentro del cuerpo social, para ser diagnosticado, teorizado y exorcizado allí. Este artículo, sin embargo, sostiene que el surgimiento del populismo penal no es ni el punto final ni los límites del populismo y sus consecuencias en la sociedad moderna. Más bien, solo marca los comienzos de su resurgimiento más general en el siglo XXI. En este sentido, el populismo penal debe ser entendido solo como una fase de incubación conveniente en la cual las fuerzas populistas encontraron

con vigor y fuerza antes de fluir mucho más profundamente hacia la sociedad convencional a partir de esa gestación. Si se piensa que el populismo penal representa un ataque al vínculo establecido desde hace mucho tiempo entre la razón y el castigo moderno, este ha sido solo el preludeo de la forma en que un populismo político mucho más fluido ahora amenaza con poner fin a la Razón misma, la piedra angular de la modernidad. Este cambio del populismo penal al político ha sido acelerado por dos factores interconectados: el impacto de la crisis fiscal global del 2008 y el movimiento masivo de pueblos en todo el mundo. El artículo concluye con un debate sobre cómo el populismo político continúa transformando el castigo en la sociedad moderna, así como las consecuencias sociales más amplias y las implicancias de su surgimiento.

PALABRAS CLAVE

populismo penal — razón — castigo — riesgo — política — inseguridad

FECHA DE RECEPCIÓN: 8 de marzo, 2017.

FECHA DE ACEPTACIÓN: 22 de abril, 2017.

INTRODUCCIÓN*

El fenómeno del populismo penal se identificó por primera vez como una característica de las democracias occidentales de habla inglesa a finales del siglo XX, específicamente en Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y Canadá (véase Roberts et al., 2003; Pratt, 2007). Sin embargo, desde entonces se han identificado varios aspectos de este fenómeno en diversos países, aunque la forma exacta que adopta y el impacto que tiene de sociedad en sociedad varían. Generalmente exige un enfoque mucho más punitivo del quebrantamiento de la ley. Esto se ha traducido en un drástico crecimiento en las tasas de encarcelamiento, como en el mundo anglófono; pero también ha llevado al reclamo de un uso más enérgico de la pena de muerte en algunas sociedades asiáticas, particularmente Japón (Johnson, 2006), o la castración química de delincuentes condenados por delitos sexuales contra menores, como en Corea del Sur (Koo et al., 2014) y República Checa (Haney, 2016).

Con cada sociedad a la que afecta, pareciera que el populismo penal socavara el núcleo mismo sobre el cual se había construido el castigo moderno: la forma en que, desde la época de la Ilustración, se esperaba que la ciencia, la racionalidad y el conocimiento experto superaran al sentido común emotivo y desinformado, garantizando así que la razón superaría a la anti-razón en el desarrollo de la política penal. Sin embargo, ahora el populismo penal le cierra la puerta en la cara a la razón y aumenta las tasas de encarcelamiento cuando se conocen bien los nefastos efectos sociales y económicos de la prisión. Además, ratifica el lugar de la pena de muerte en los sistemas penales modernos cuando se sabe que no hay pruebas concluyentes sobre su efecto disuasorio. O bien, apunta a los cuerpos de los delincuentes, en un retorno al castigo de la era premoderna, en lugar de obligarlos a perder tiempo o dinero de acuerdo con las expectativas de castigo en el mundo moderno.

La mayoría de los análisis de estos hechos han tratado al populismo penal como una especie de acontecimiento localizado dentro del cuerpo social, como una desviación de la dirección que ha tomado el castigo en la sociedad moderna, como una infección que puede ser diagnosticada, tratada y exorcizada. En este punto se piensa que la voz de la razón volverá a guiar las disposiciones penales moder-

* Traducción de Patricia Guerra Tejada

nas por el camino progresista y humanitario, lejos de tales excesos (Roberts et al., 2003; Pratt, 2008; Neto, 2009; Müller, 2010). Sin embargo, hay una miopía en estos enfoques. Es como si el populismo se hubiera metido en este sector de la sociedad moderna y, de alguna forma, estuviera confinado allí. Puede causar estragos en ese lugar, pero no puede escapar de él. Sin embargo, este artículo sostiene que el surgimiento del populismo penal no es ni el punto final ni los límites del populismo y sus consecuencias en la sociedad moderna. Más bien, solo marca los comienzos de su resurgimiento más general en el siglo XXI. En este sentido, el *populismo penal* debe ser entendido solo como una fase de incubación idónea en la cual las fuerzas populistas encontraron vigor y fuerza antes de fluir mucho más profundamente hacia la sociedad convencional a partir de esa gestación. Y el populismo penal fue solo una advertencia del caos mucho mayor que vendría cuando el populismo se desató completamente. Si se piensa que el populismo penal representa un ataque al vínculo establecido desde hace mucho tiempo entre la razón y el castigo moderno, este ha sido solo el preludeo de la forma en que un *populismo político* mucho más fluido ahora amenaza con poner fin a la Razón misma, la piedra angular de la modernidad.

El artículo comienza con un examen de la forma en que, a principios de los años noventa, el populismo surgió inicialmente en los sistemas penales de los principales países de habla inglesa. Luego argumenta que el paso del populismo penal al político ha sido precipitado por dos factores interconectados. En primer lugar, el impacto de la crisis fiscal mundial del 2008, que exacerbó en gran medida la forma en que la globalización había erosionado la seguridad económica. Grandes sectores de la sociedad moderna han quedado resentidos desde entonces y marginados ante su propia impotencia frente a tales fuerzas, mientras que los gobiernos parecen indiferentes o inconscientes a sus preocupaciones. En segundo lugar, las amenazas a la identidad individual y nacional provocadas por el movimiento de masas de los pueblos en todo el mundo, de este a oeste, de norte a sur y de sur a norte. Como ha ocurrido, el delito ya no es el principal representante de las amenazas al bienestar y la ruptura del orden y la autoridad. Más bien, la preocupación por los delitos se ha mezclado con las preocupaciones acerca de la *diferencia* y la *alteridad*, de la cual ser un extraño, extranjero o inmigrante, legal o no, se ha convertido en uno de los símbolos más potentes.

Más allá de los controles del sistema penal en sí, existe la exigencia de que se deben defender las fronteras, se deben establecer nuevos límites —como murallas

y cercos eléctricos—, se deben elaborar e instalar mecanismos de vigilancia, se debe *eliminar* a los terroristas y que se debe mantener un registro de aquellos con religiones o etnias sospechosas para hacer frente a estas amenazas más difusas y amorfas. Los individuos y las organizaciones que obstaculizan esta aparentemente necesaria defensa de la salud particular y nacional —generalmente con sustento en las libertades civiles o por motivos humanitarios— son considerados traidores y *enemigos del pueblo*, un pueblo ahora dispuesto a mirar más allá de las estructuras democráticas existentes y los modos de gobernanza para encontrar soluciones que reestablezcan la seguridad. Al hacerlo, están dispuestos a abandonar la Razón y poner su confianza en políticos populistas para llevarlos por un camino que los mantendrá libres de tales amenazas existenciales. Estos líderes no necesitan un plan ni itinerarios para guiarlos, simplemente le dicen a sus seguidores que tengan confianza y fe en ellos.

CASTIGO, RAZÓN Y ANTI-RAZÓN

La Edad de la Razón anunció el surgimiento de la sociedad moderna. Un mundo sin razón, escribió John Locke (1690/2016, p. 89), da lugar al poder despótico que la naturaleza no otorga:

(...) la naturaleza no establece entre los hombres semejantes distinciones, y ningún pacto puede establecerlas. Nadie dispone de un poder arbitrario sobre su propia vida y, por tanto, no puede transferir semejante poder a otro. Este poder solo existe en realidad cuando un agresor ha perdido el derecho a la vida al colocarse en estado de guerra con alguien. El agresor se ha salido de la ley de la razón que Dios estableció como regla para las relaciones entre los hombres y de los recursos pacíficos que esa regla enseña, recurriendo a la fuerza para imponer sus pretensiones injustas y carentes de derecho; al hacerlo se ha expuesto a que su adversario acabe con él, tal como lo haría con cualquier animal dañino y violento que amenace con quitarle la vida.

La Razón, pensaron Locke y los estudiosos posteriores de la Ilustración, pondría así fin a la tiranía, el absolutismo y la arbitrariedad en el ejercicio del poder soberano en el mundo premoderno, el mundo sin Razón:

(...) la libertad del hombre y la libertad de obrar conforme a su propia voluntad, se fundan en su uso de razón que es capaz de instruirlo en esa ley por la cual él ha de gobernarse, y hacerle saber hasta dónde le es dado ejercitar la libertad de su propia voluntad (Locke, 1690/2016, p. 35).

Para Thomas Paine, «el arma más formidable contra todo tipo de error es la razón. Nunca he usado otra, y confío en que nunca lo haré» (1974, p. 1). De manera similar, Montesquieu: «la ley, en general, es la razón humana en cuanto gobierna a todos los pueblos de la tierra; las leyes políticas y civiles de cada nación no deben ser más que los casos particulares a los que se aplica la razón humana» (1914/2011, p. 6).

Pero si la razón traería justicia para todos, también debía poner fin a las inconsistencias e incertidumbres del orden de justicia penal que reforzaban el ejercicio premoderno del poder soberano mediante brutales castigos públicos al cuerpo humano: «debemos derribar las barreras que no haya planteado la razón», argumentó Diderot (1751/1967, p. 93). Para ello la teoría jurídica tuvo que desprenderse de las asociaciones anteriores que había hecho entre la ley divina y los monarcas absolutos que habían gobernado el mundo premoderno. De ser una fuerza misteriosa, incalculable e impredecible que solo podrían descifrar los que gobernaban, la ley se volvió, en cambio, antropogénica. Representaba un contrato entre todos los miembros de una sociedad, más que los dictados de un déspota: «Debiendo ser las leyes pactos considerados de hombres libres, han sido pactos casuales de una necesidad pasajera; que debiendo ser dictadas por un desapasionado examinador de la naturaleza humana, han sido instrumento de las pasiones de pocos» (Beccaria, 1764, p.12). La búsqueda de la teoría legal se convirtió entonces en el intento por mostrar lo que la ley *debe* ser, en lugar de lo que el soberano decretó que sea. Debe proporcionar seguridad y orden para todos y no solo al soberano; y debe proporcionar derechos fundamentales protegidos en ideas inviolables de justicia que ningún gobernante o gobierno podría eliminar en el futuro. Por lo tanto, Beccaria (1764) sostenía que la ley debía ser segura y conocida para todos y aplicable a todos en forma de códigos penales:

(...) pero un código fijo de leyes, que se deben observar a la letra, no deja más facultad al juez que la de examinar y juzgar en las acciones de los ciudadanos si son o no conformes a la ley escrita; cuando la regla de lo justo y de lo injusto, que debe dirigir las acciones tanto del ciudadano ignorante

como del ciudadano filósofo, es un asunto de hecho y no de controversia; entonces los súbditos no están sujetos a las pequeñas tiranías de muchos, tanto más crueles cuanto es menor la distancia entre el que sufre y el que hace sufrir, más fatales que las de uno solo porque el despotismo de pocos no puede corregirse sino por el despotismo de uno, y la crueldad de un despótico es proporcionada con los estorbos, no con la fuerza (p. 24).

En la redacción de estos códigos, la ciencia y la racionalidad comenzaron a aplicarse a la justicia penal. Diderot (1753/1966, p.32) escribió que, en la Era de la Razón, «disponemos de tres medios principales para adquirir conocimiento... la observación de la naturaleza, la reflexión y la experiencia», en lugar de hacer la ley sobre la base de la religiosidad de los sacerdotes o de la adulación de los cortesanos. La observación recoge los hechos; la reflexión los combina; la experimentación verifica el resultado de esa combinación. Beccaria (1764/1872) instó así a que el castigo fuera más eficaz que espectacular; debe ser proporcional al delito cometido en lugar de ser innecesariamente brutal: «El fin de las penas no es atormentar y afligir a un ente sensible, tampoco deshacer un delito ya cometido... ¿Pueden los quejidos de un pobre volver el tiempo atrás o revertir el delito que ha cometido?» (p. 46). En lugar de ser simplemente una demostración de poder soberano, «el fin del castigo, por lo tanto, es impedir que otros cometan un delito similar» (p. 47). Esto significaba que la escala penal debía ser proporcional al delito cometido: «Ante dos delitos de igual pena y de diferente gravedad, el delincuente se inclinará siempre por el más grave» (p. 32).

Kant (1797/1887) reforzó luego cuáles deberían ser los límites del castigo moderno: «[este] no debe ser administrado simplemente como un medio para promover otro bien, ya sea con respecto al delincuente o a la sociedad civil, sino que en todos los casos debe imponerse solo porque el individuo a quien se ha infligido ha cometido un delito» (p. 155). No se trataba solo de no castigar al inocente, sino que además el castigo de los culpables tenía que ser un fin en sí mismo: el castigo infligido para otros fines solo podía conducir a los excesos y las inequidades distintivas de la era pre-moderna: «¿Acaso debe apoyarse la propuesta de conmutar una pena y conservar la vida de un condenado a muerte si este tuviera la suerte de salir bien librado tras consentir someterse a peligrosos experimentos?» (Kant, 1797/1887, p. 196). Las prescripciones normativas para el funcionamiento del derecho penal y el castigo en la sociedad moderna fueron inicialmente establecidas y desarrolladas a través del trabajo de estos estudiosos. A partir de

entonces, los asuntos relacionados con la aplicación de la ley y el castigo serían determinados por expertos seculares, capaces de aprovechar el conjunto de estadísticas gubernamentales acumuladas desde principios del siglo XIX para hacer juicios científicos al determinar la política y sus efectos probables.

Esto no significó, por supuesto, que la política impulsada por la Razón y esto por sí solo generara una progresión lineal directa durante la época moderna. Enfrentó numerosos impedimentos y tomó varios desvíos. La fuerza emotiva y el poder simbólico de los castigos al cuerpo humano (Hay, 1976) significaron que la pena de muerte no fue eliminada de las agendas penales de las principales sociedades de habla inglesa hasta los años setenta. El énfasis en los castigos fijos y certeros no impidió la introducción de leyes de sentencia indeterminada a comienzos del siglo XX (Pratt, 1997). El énfasis inicial en el castigo como retribución dio lugar a un enfoque en el tratamiento y la rehabilitación durante gran parte del siglo XX, lo que a menudo condujo a las injusticias que Kant había advertido cuando los fines extra-punitivos se asocian con el castigo (Von Hirsch, 1976).

No obstante, después de las revelaciones posteriores a 1945 sobre las atrocidades nazis, se dio un renovado énfasis a la necesidad de proteger los derechos humanos individuales en el derecho penal. La Declaración Universal de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU de 1948 estipulaba que «todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie será privado de su libertad [excepto por] la detención legal de una persona luego de ser condenada por un tribunal competente» (Artículo 5). Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional (Artículo 7). En 1960, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos escuchó su primer caso, «un salto adelante en la historia de los derechos humanos» (Howard & Morris, 1964, p. 153). La protección de los derechos individuales también se reflejó a nivel jurisdiccional. En los Estados Unidos, la Corte Suprema declaró inconstitucional la acusación por causa de su condición y no por delito.¹ En *O'Connor v Donaldson* (1975),² se sostuvo que el confinamiento involuntario de un individuo no peligroso capaz de cuidarse a sí mismo constituía «una restricción masiva de la libertad» y que era inconstitucional.

¹ *Robinson v California* 370 US 660 (1962).

² 422 US 563.

Incluso aquellas áreas de desarrollo penal que se habían resistido o se habían apartado de las expectativas de la Razón, gradualmente sucumbieron a sus demandas. De todas formas, siempre se había asumido que las penas de prisión indeterminadas (por lo menos en los países de habla inglesa) se mantendrían al margen del sistema penal y que rara vez se utilizarían. En Inglaterra, Sir Evelyn Ruggles-Brise, jefe de la Comisión de la Prisión Inglesa, se esforzó por señalar que tales disposiciones

(...) no tocan a ese gran ejército de vagabundos habituales, borrachos o infractores de estatutos sociales que figuran tan prominentemente en la población carcelaria. *[Son] armas que se utilizarán solo cuando un autor profeso de actos sociales esté suelto y represente un peligro para la comunidad, cuando al salir de prisión vuelva a repetir conductas violentas o predatorias* (1921, p. 58; el énfasis es nuestro).

A partir de entonces, las leyes de psicópatas sexuales de los Estados Unidos, que prevén una condena fija de prisión por el delito original después de que las personas diagnosticadas fueran primero *sanadas* en una institución psiquiátrica, fueron regularmente declaradas inconstitucionales o cayeron en desuso (Tappan, 1957). Otras formas de sentencia preventiva indefinida corrieron la misma suerte (Bottoms, 1977). Su uso arbitrario e inconsistente hizo que su vigencia pareciera injustificable y su abolición, inevitable (ver el Informe de Nueva Zelanda del Comité de Revisión de Políticas Penales, 1981).

En cuanto a la pena de muerte, la Razón y sus atributos —la ciencia, la racionalidad, el humanitarismo— acabaron por triunfar sobre el exceso emotivo y punitivo que había representado para los encargados de formular políticas en el período posterior a la guerra. Fue abolida en estas sociedades anglófonas durante los años sesenta y setenta. En ese momento, el gobierno estaba dispuesto a deshacerse de los castigos que se creía que no tenían lugar en una sociedad democrática moderna:

[la pena de muerte] es la única reliquia que queda en nuestro mundo penal del antiguo sistema de represión total que se empleó contra los criminales, y que fracasó rotundamente [...] estos instrumentos no tienen espacio en las instituciones de una democracia libre [...] los castigos represivos

pertenecen a los sistemas de los Estados totalitarios y no a las democracias. No fue casualidad que los principales exponentes de la violencia y la severidad en el tratamiento de los delincuentes en otras épocas fueran los estados nazi y fascista (Hansard 449 del 14 de abril de 1948, columna 1014-1015).

Al imponer una moratoria (temporal) sobre la pena de muerte en los EE.UU., el Tribunal Supremo en *Furman v Georgia* (1972)³ sostuvo que «una de las funciones de la Constitución es ayudar a la nación a ser más *más civilizado*». Una sociedad con las aspiraciones que la nuestra declara con tanta frecuencia no puede, conforme a sus metas, quitarle la vida a ningún ser humano, por muy reprochable que sea su conducta pasada.

Alrededor de 1980, la Razón había alcanzado su punto culminante en el desarrollo del castigo en la sociedad moderna. La prisión había llegado a ser considerada como una «opción penal de último recurso»: demasiado costosa, inhumana e ineficiente (Ministerio del Interior, 1989). Durante gran parte del siglo XX, se habían erigido obstáculos frente a ella para excluir a una amplia gama de delincuentes para quienes tal sentencia era demasiado dura y haría más daño que bien: los primeros delincuentes, los delincuentes jóvenes, delincuentes infantiles, quienes hayan sufrido algún tipo de inestabilidad mental, borrachos, vagabundos y, en última instancia, prácticamente todos los delincuentes no violentos. No solo eso, sino que también el movimiento «de regreso a la justicia» (von Hirsch, 1976), con su énfasis en castigos consistentes, limitados y proporcionados, reafirmó la continuidad de las expectativas penales de la Era de la Razón. Estos eran todavía el criterio con el cual se podrían juzgar los lineamientos de una sociedad con las presunciones y expectativas de la modernidad.

En la estructuración de este desarrollo, un sistema de elite compuesto por altos funcionarios públicos, jueces, profesores universitarios, y las secciones de prestigio de los medios de comunicación como la BBC y el diario *The Times*, como lo era entonces, fueron de gran influencia en el gobierno, capaces de pronunciarse sobre el camino a seguir del castigo sin miedo ni posibilidad de ser impugnados. El Libro Blanco del Ministerio del Interior (1959, p. 13) *Práctica penal en una sociedad cambiante* —la declaración de los objetivos de la política penal británica

³ 408 US 238, 296-7.

líder en el periodo post-guerra— determinó así que el castigo debe adoptar «métodos más humanos y constructivos». Además, el eje del poder penal que la elite había formado con los gobiernos no solo excluía a los representantes de quienes afirmaban hablar en nombre del público en general, sino que consideraba que los gobiernos debían adelantarse a la opinión pública. La abolición de la pena de muerte se había convertido en una ilustración de un gobierno fuerte, preparado para actuar como mejor le parecía, e independientemente de los deseos de la opinión pública. Como dijo un orador del parlamento británico:

Dudo mucho que en algún momento durante los últimos cien años un plebiscito hubiera llevado a cabo alguna de las grandes reformas penales que se han hecho. La apelación en el tiempo de [Sir Samuel] Romilly siempre fue la creencia de que la opinión pública no lo soportaría, pero hay ocasiones en que esta Cámara tiene razón incluso si la opinión pública no está de acuerdo en ese momento (Hansard del Reino Unido 536, 10 de febrero 1955, columna 2083).

Al parecer, cerrando cualquier debate posterior, el editorial del *Times* (13 de marzo 1975, p. 5) opinó que «se ha dicho que el Parlamento está bastante adelantado a la opinión pública [...] esto es en gran parte cierto [...] *sin duda no es asunto nuestro esperar a la opinión pública en un tema tan importante*».

Sin embargo, desde entonces muchas de estas tendencias y características se han revertido, como si una anti-Razón renaciente impulsara ahora el desarrollo penal moderno. El crecimiento del encarcelamiento, en particular en algunos países anglófonos, es quizás el ejemplo más obvio de esto. En Estados Unidos, la tasa de encarcelamiento aumentó un 700% entre 1975 y 2012 (de 110 por cada 100.000 habitantes a 762)⁴. En el Reino Unido casi se ha duplicado (de una tasa de 80 por cada 100.000 en 1990 a 147 en 2016); y se ha duplicado con creces en Nueva Zelanda (de 85 por cada 100.000 en 1985 a 208 en 2015). Además, las penas de prisión indeterminadas han sido reacondicionadas y reactivadas. En Nueva Zelanda, el número de presos que cumplen el período indefinido de detención preventiva ha aumentado de 12 en 1985 a 284 en 2015. Uno de cada cinco presos

⁴ Se empleó el World Prison Brief como fuente de todas las estadísticas penitenciarias. Aquí la tasa estadounidense representa una baja respecto del máximo de 755 en 2008.

ingleses en 2012 cumplía penas indefinidas, socavando drásticamente el anterior énfasis en la proporcionalidad y la coherencia.

También ha habido medidas penales innovadoras que afectan al núcleo mismo de lo que se había convertido en valores inviolables de castigo en la sociedad moderna. Las leyes de *three strikes*⁵, a veces de *two strikes*, castigan la existencia de antecedentes penales además del delito cometido. La legislación retrospectiva, que castiga un comportamiento que no era criminal en su comisión, se justifica por el hecho de que la necesidad de protección pública es mayor que los derechos individuales. El principio de *non bis in idem* es transgredido por las disposiciones de *detención civil* (es decir, prisión indefinida) para algunos delincuentes sexuales al final de una pena de prisión determinada, como es el principio de que solo los culpables pueden ser castigados: están detenidos no porque hayan cometido más delitos, sino porque se cree que corren el riesgo de cometer delitos en el futuro. Estos movimientos para controlar el riesgo en un extremo del sistema penal han sido correspondidos en el otro por el control del movimiento en el espacio público de una variedad de personas que viven en la calle (miembros de pandillas, vagabundos, mendigos, etc.), una forma de supervisión y vigilancia para prevenir futuros delitos, pero antes de que realmente hayan cometido uno.

Además, el lenguaje del castigo es ahora mucho más característico de la voz de la anti-Razón que de la Razón. *Three Strikes*, «vida significa vida» y «no a la libertad condicional», etc., ponen en la legislación un sentido común crudo y vengativo en lugar de la objetividad y racionalidad humana. Al mismo tiempo, la autoridad del Estado central se ha debilitado (Garland, 1996). Ahora, en lugar de estar preparado para adelantarse a la opinión pública, está listo para implementar algunas de sus demandas más desbocadas. Aun así, esto no ha sido suficiente para impedir que una parte de la población actúe como justiciera desafiando el poder monopolístico previo del Estado para castigar (Pratt, 2000).

⁵ Se refiere a las leyes aprobadas en el Estado de Washington de los EEUU (1993): «los delincuentes que sean condenados por tercera vez, por delitos graves, serán reclusos a perpetuidad sin posibilidad de que se les conceda la libertad condicional». De ahí procede el coloquial apelativo de Ley de los Three Strikes, por la expresión del béisbol: *three strikes and you're out* (al tercer golpe, estás fuera). Los objetivos que se perseguían con esta disposición eran incrementar la seguridad ciudadana, reducir el número de delincuentes reincidentes y restaurar la confianza de los ciudadanos en la administración de la justicia. (N. de la T.)

UNA EXPLICACIÓN AL POPULISMO PENAL

Una explicación de estas transformaciones se atribuye al surgimiento del populismo penal. Primero esto debe distinguirse del «populismo autoritario» (Hall, 1979). Este último fue considerado como la imposición de «un nuevo régimen de disciplina social y el liderazgo *desde arriba* en una sociedad percibida cada vez más como sin rumbo y fuera de control» (Hall, 1988, p. 84). Pero tal explicación no implica ningún reconocimiento de la forma en que los movimientos sociales populistas han roto el eje existente del poder penal y formaron uno nuevo con el gobierno que, habiendo alejado a las elites del sistema de las áreas de influencia, ahora pone su propio sello antiliberal sobre el castigo. En segundo lugar, también debe distinguirse de la *punitividad populista* (Bottoms, 1995). Esto implica que los políticos *aprovechen* la postura aparentemente punitiva del público frente al delito para conseguir una ventaja electoral, manipulando esto con promesas extravagantes sobre lo que se alcanzaría con más castigo. Sin embargo, aquí nuevamente la clase política dominante sigue pareciendo estar en control de los acontecimientos en lugar de responder a las demandas de activistas externos de la ley y del orden externo.

En cambio, el populismo penal aborda específicamente el rol y la influencia de estos individuos, grupos y organizaciones hasta ahora ajenos al desarrollo penal contemporáneo. Desarrollando el trabajo de cientistas políticos como Shils (1956) y Canovan (1981) sobre el populismo, es como si el ámbito de la delincuencia y el castigo actuaran como imanes que reúnen a aquellos que se ven a sí mismos marginados por gobiernos que habrían permitido que personas indignas o no merecedoras prosperaran a sus expensas. En el campo de la justicia penal, era como si el sistema hubiera estado moviendo los hilos del gobierno, dando un tratamiento generoso y sentencias indulgentes para los delincuentes, ignorando el bienestar de las víctimas de estos delitos y de los ciudadanos respetuosos de la ley. A partir de los años ochenta, estas preocupaciones se convirtieron en protestas furiosas de nuevos movimientos sociales emergentes, que ahora reclamaban el derecho a hablar en nombre de aquellos a quienes el gobierno había olvidado. Sus demandas principales incluían terminar con las influencias funestas del sistema y substituirlos por sus propios representantes. En el nuevo eje del poder penal que comenzó a forjarse, la política de control de la delincuencia debía apuntar a proteger al público de los riesgos del delito y castigar a quienes los cometen, en lugar de salvaguardar los derechos individuales de los delincuentes y posibles delincuentes.

El populismo penal, que inicialmente se consideraba una característica casi exclusiva de las principales sociedades anglófonas, surgió de las tensiones y dinámicas creadas por la reestructuración neoliberal que tuvo lugar en estas sociedades desde principios de los años 80 (Pratt, 2007). Se creía que tenía cinco causas básicas:

I. La disminución de la deferencia

Esto ayuda a explicar el desencanto con las estructuras de poder del sistema. Significa que los valores y las opiniones de las élites que antes habían sido aceptadas sin ser cuestionadas ahora no solo son respetados, sino que pueden provocar indignación y burla. Nevitte (1996) sostenía que el declive de la deferencia es una consecuencia natural de las reformas sociales posteriores a 1945 que elevaron los niveles de vida de toda la población. Antes de los años ochenta, se suponía que las figuras del sistema —en las universidades, en la administración pública, etc.— formaban una clase natural de gobierno sobre la base de su linaje, su educación y su riqueza y las posiciones de poder que estas características les garantizaban. Sin embargo, a partir de entonces, quienes pertenecían al gobierno o a las burocracias gubernamentales ya no serían vistos como superiores socialmente, teniendo el derecho exclusivo de pronunciarse sobre los asuntos del día, y serían desafiados por aquellos fuera de estos círculos del sistema.

Sin embargo, la medida en que se ha producido esta supuesta equiparación en algunas sociedades (Gran Bretaña, por ejemplo) parece discutible. Lo que parece más pertinente a la disminución de la deferencia es la forma en que el sistema de justicia penal no atendió el problema del aumento en la delincuencia a partir de la década de 1950 y, como resultado, se percibió distante y apartado de las preocupaciones de la *gente común* (el exitoso uso que dio Margaret Thatcher a la *ley y el orden* en las elecciones británicas de 1979 fue una de las primeras ilustraciones de la potencia política de este asunto). La posterior disminución de la delincuencia desde principios de los noventa en la mayor parte de la sociedad occidental (por ejemplo, Zimring, 2012; Farrell et al., 2014) no pudo desbancar la forma en que el aumento de la delincuencia se había convertido en un *hecho social* que se daba por sentado, para el cual el sistema no tenía respuesta. Los intentos de sus miembros por explicar que estaba en descenso y no en aumento simplemente se convirtieron en prueba de su propia irrelevancia y duplicidad. De la misma manera, un área en desarrollo como el control de riesgos a través de medidas penales ha llegado a simbolizar la forma en que los gobiernos están dispuestos a deshacerse de los vínculos

previos con el sistema, con su intención —ahora ridiculizada— de asegurar los derechos individuales en lugar de proteger los derechos comunitarios. Al presentar la legislación británica sobre el comportamiento antisocial, el ministro del Interior declaró que esto «representaba un triunfo de la política comunitaria sobre las elites metropolitanas aisladas» (Hansard 310, 8 de abril de 1998, columna 370).

II. La disminución de la confianza en los políticos y los procesos democráticos existentes

Los electores se vuelven cada vez más escépticos de las promesas de los políticos y las garantías de futuros mejores que generalmente no se materializan (especialmente cuando esto se ve agravado por evidencia de su propia conducta escandalosa, como las denuncias de enormes gastos fraudulentos por parte de parlamentarios británicos en el 2009). De hecho, en lugar de traer futuros mejores, las políticas gubernamentales pueden traer desastre a aquellos ciudadanos que son fieles a ellas. Como resultado de la reestructuración económica, los buenos ciudadanos que habían seguido las recomendaciones del gobierno e invertido —muchos por primera vez— en el mercado de valores (haciendo fortunas de este modo se anunciaban como ya no es la prerrogativa de los que ya son ricos) serían probablemente los más perjudicados cuando ocurrió la primera gran crisis post-reestructuración en octubre de 1987.

Tomando como ejemplo el caso de Nueva Zelanda, este ha sido uno de los países a la vanguardia de la reestructuración. Pero luego la crisis contribuyó a una drástica disminución de la confianza en los principales partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha. El apoyo cayó a 9% y 12% del electorado, respectivamente, en las encuestas de opinión a principios de 1990 (véase Pratt & Clark, 2005). Esta disminución de la confianza condujo simultáneamente a un aumento en el apoyo al partido de derecha y populista Nueva Zelanda Primero. Este promete dejar el «control de los recursos de Nueva Zelanda en las manos de los neozelandeses, mediante la restauración de la fe en el proceso democrático y la toma de decisiones con sentido común en beneficio de todos» (Nueva Zelanda Primero, 2014). Este descenso también trajo un cambio en el sistema electoral que prácticamente le ha garantizado una representación permanente a este partido en el Parlamento. Tras un referéndum, el sistema *first past the post* se cambió por una representación proporcional en 1996. Nueva Zelanda Primero casi siempre será capaz de atraer a un núcleo descontento del electorado, que será suficiente para que supere el umbral de 5% que necesita para obtener escaños

parlamentarios. En dos ocasiones desde entonces se ha convertido en *pieza clave* en los gobiernos de coalición.

Gran parte del éxito inicial de este partido fue gracias a que apelaron a la inquietud pública sobre la delincuencia y prometieron soluciones mágicas para el problema: más policía, sentencias más severas (Pratt & Clark, 2005). Los principales partidos se prepararon para acceder a estas demandas a fin de ganar su apoyo en el parlamento (Lacey, 2009). Es más, el atractivo popular de *ley y orden* que había demostrado instó a los partidos dominantes (como en Gran Bretaña y los EEUU; véase Jones & Newburn, 2006) a competir entre sí en estos términos, construyendo así la introducción del populismo penal en la política del gobierno.

III. El aumento de la inseguridad y la ansiedad global

Desde la década de 1980, el mundo moderno se ha convertido en un lugar mucho más riesgoso y amenazante (Beck, 1992), en muchos sentidos como consecuencia de la misma reestructuración. Si esto ha traído nuevas posibilidades de satisfacción en la vida cotidiana, también ha estado plagado de nuevos riesgos, como el terrorismo, nuevos tipos de cánceres, fraudes con tarjetas de crédito y así sucesivamente. Esto ha ocurrido en conjunto con la fragmentación o desaparición de muchos de los antiguos y conocidos símbolos de seguridad y estabilidad. La durabilidad del empleo y todo lo que viene con ello ha desaparecido para muchos (Standing, 2014). La vida familiar se ha vuelto mucho más tangencial, con una mayor probabilidad de divorcio en medio del crecimiento de las relaciones de facto transitorias⁶.

⁶ Las tasas de matrimonio (por ejemplo, cantidad de matrimonios registrados en la población de una determinada área geográfica durante un año determinado, por cada 1.000 habitantes) son las siguientes: Australia, 1980, 7,4; 2013, 5,1; Canadá, 1981, 7,7; 2008, 4,4; Nueva Zelanda, 1980, 7,3; 2014, 4,4; UK, 1980, 7,4; 2012, 4,4; EEUU, 1985, 10,1; 2012, 6,8. Las tasas de matrimonios que se divorcian en el mismo periodo son las siguientes: Australia, 1980, 2,75:1; 2013, 2,3:1; Canadá, 1980, 3:1; 2008, 2:1; Nueva Zelanda, 1980, 3:1; 2014, 2,5:1; Reino Unido, 1980, 2,7:1; 2012, 2:3:1; EEUU, 1980, 2:1; 2012, 2,2:1. Las parejas en relaciones de facto en Australia aumentaron de 5% en 1982 a 15% en 2006; en Canadá, 6% en 1981 a 16,7% en 2011; en el Reino Unido, de 8,9% en 1996 a 16,4% en 2014. Las familias monoparentales aumentaron en Australia de 8,6% en 1981 a 15% en 2011; en Canadá, de 11,3% en 1981 a 16,3% en 2011; en Nueva Zelanda de 12% en 1981 a 17,8% en 2013; en el Reino Unido de

Por lo tanto, una vez más, la utilidad del delito y castigo para subsanar estas deficiencias en el capital social. Durante la década de 1990 y a principios del siglo XXI parecía que el delito era la fuente más obvia e inmediata de riesgo y peligro, el símbolo más obvio e inmediato de la incapacidad de los gobiernos y sus expertos para lograr que la vida cotidiana sea más segura. Como lo demuestran Tyler y Boeckmann (1997), mientras más se desmorona la cohesión social, más probable será que se respalden los castigos severos, no solamente como respuesta a la delincuencia, sino como una forma de generar consenso y solidaridad y de restaurar la autoridad que parece faltar en el tejido social. La intensidad y la ferocidad del nuevo lenguaje de la pena («tres avisos», etc.) reflejan el reforzado y extendido papel que ha tenido que desempeñar el castigo en estas sociedades.

IV. La influencia de los medios de comunicación masiva

La vida en la sociedad moderna se ha caracterizado por «el secuestro de la experiencia» (Giddens, 1991): «La separación de la vida del día a día del contacto con esas experiencias que generan preguntas potencialmente perturbadoras y existenciales, particularmente experiencias relacionadas con la enfermedad, la locura, la criminalidad, la sexualidad y la muerte» (p. 244). A medida que la mayoría de la gente en la sociedad moderna comenzó a incomodarse con el manejo de estos aspectos de la vida cotidiana, estos temas comenzaron a ocultarse detrás de pantallas burocráticas, con los medios de comunicación informando indirectamente a sus públicos sobre ellos. O mejor dicho, durante gran parte del siglo XX la información que se les proporcionó fue modelada por secciones reconocidas de los medios de comunicación, lo que permitió al sistema seguir controlando en gran medida la percepción del público en esta materia.

Sin embargo, desde la década de 1980 los cambios estructurales en los medios de comunicación hicieron que esto ya no fuese posible. Los cambios en la tecnología de los medios de comunicación, el advenimiento de la televisión por satélite y la desregulación de la radiodifusión habían dado lugar a un conjunto mucho más

13,9% en 1981 a 25% en 2014; en EEUU de 19,5% en 1980 a 29,5% en 2008. En tanto, el tamaño promedio del núcleo familiar disminuyó en todas las sociedades: en Australia, de 2,8 en 1986 a 2,6 en 2006; en Canadá, de 3,3 en 1981 a 2,9 en 2011; en Nueva Zelanda de 3,0 en 1981 a 2,7 en 2013; en el Reino Unido de 2,7 en 1981 a 2,4 en 2012; en EEUU de 19,5 en 1980 a 29,5 en 2008.

diverso y plural de concepciones sobre el mundo. Esto en un momento en que el declive de la vida comunitaria orgánica ha significado que las personas confían mucho más en los medios de comunicación que en sus amigos, familiares o colegas de trabajo para informarse sobre el mundo. Estos cambios estructurales en los medios de comunicación significaron que el comienzo de una baja en la tasa de delitos tuvo poco impacto público. No era de interés periodístico. Por el contrario, el delito siguió siendo definido como la fuente más obvia e inmediata de riesgo y peligro. La desregulación de la radiodifusión estatal en medio de la llegada de la nueva tecnología de los medios significaba que la labor periodística se había simplificado, se había vuelto más competitiva, de más fácil acceso y mucho más sensacionalista: más que nunca, una historia sensacionalista sobre el delito —sobre su amenaza, no su caída— superaría a la competencia, atraería al público y, por lo tanto, generaría más ingresos por publicidad (Jewkes, 2004). En medio de esta reestructuración, el sistema de justicia penal se vio incapaz de controlar los parámetros del debate público y el conocimiento sobre estos asuntos.

V. La importancia simbólica de las víctimas de delitos

La importancia de las noticias sobre delitos en el nuevo marco de conocimiento también dio mayor énfasis a los relatos de las víctimas, en lugar de un análisis independiente y objetivo de los expertos. En este sentido, a las víctimas de delitos se les dio un nuevo tipo de autenticidad y autoridad. Sus experiencias personales superaban las realidades estadísticas de la delincuencia. En la mayoría de los casos, estas experiencias se presentaron como algo que fácilmente podría pasarle a cualquiera: en el camino a la escuela, en camino a casa del trabajo y así sucesivamente se convirtió en el punto de partida de una serie de horrores que luego podría ocurrirles a estas víctimas inocentes. Cuando este tipo de catástrofes podía afectar a ciudadanos respetables, comunes y corrientes en la banalidad de la vida cotidiana, era como si lo que les había pasado se convirtiera en una experiencia universal y un peligro universal.

Escuchar, leer y ver sus traumas llevó a la demanda de castigos más emotivos y expresivos que reflejaran la ira pública y aversión a este tipo de delitos. También generó la demanda de más oportunidades para que las víctimas expresen su propia ira en su sufrimiento, en contraste con los tonos medidos y cuidadosos de especialistas en las salas de tribunales. En varias jurisdicciones, tales demandas han exigido una reorganización espacial y emocional de los procedimientos de

justicia penal, con las víctimas en el centro, en lugar de sus agresores, repasando detalladamente sus declaraciones como víctima. Pero cuando los jueces parecen estar más influenciados por la razón que por el dolor de las víctimas al emitir sus sentencias (en realidad, es probable que sus manos estén atadas por limitaciones legales de todas formas), esto divide aún más el sistema de justicia penal entre las víctimas y las víctimas potenciales y sus expectativas de justicia. Se hace más evidente lo desconectadas que están estas elites de la vida cotidiana.

DÉFICITS DE LEGITIMIDAD Y EL ASCENSO DE LA POLÍTICA POPULISTA

Si bien estas fueron las fuerzas que se combinaron para conducir el populismo penal, otras sociedades modernas mostraron defensas inherentes contra este tipo de intromisiones. Por ejemplo, un mayor respeto por el sistema de justicia criminal y la confianza en el gobierno de Finlandia impidieron su aparición en ese país (Pratt, 2007). Pero desde la publicación de *Populismo penal* de Pratt queda claro que el populismo ya no limita su influencia al sector penal de los países de habla inglesa. En su lugar, trasciende gran parte de la vida política en la sociedad moderna en su conjunto, transformando extensas áreas de la gobernabilidad. Históricamente se han encontrado movimientos populistas tanto en la izquierda como en la derecha del espectro político (Betz, 1994). En Grecia, por ejemplo, llevó al partido de izquierda Syriza⁷ al poder, en oposición a las demandas de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, que apuntaban a una reestructuración económica y a la reducción masiva de los gastos del gobierno. Sin embargo, suele suceder que cuando el populismo emerge en una sociedad en particular, inclina la agenda *política bien a la derecha* (ver Haney de 2016 en la República Checa, Hungría y Polonia). Aun así, hay matices y diferencias importantes dentro del populismo de derecha. En algunos casos afirma estar en contra de grandes Estados (como en el Reino Unido); en otros (como en Suecia y Finlandia) quiere preservar amplios servicios estatales, pero solo para sus propios ciudadanos: los recién llegados no serán bienvenidos. Además, el populismo contemporáneo ha traído consigo una nueva era de política antidemocrática de *hombre fuerte* (como en Filipinas, Turquía y Rusia).

⁷ Acrónimo de la Coalición de la Izquierda Radical (en griego: Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, Synaspismós Rizospastikís Aristerás) (N. de la T.).

Pero ¿qué es lo que ha provocado el surgimiento de esta política populista? Una vez más, la combinación específica de sus causas varía. En China, por ejemplo, el populismo penal se convirtió en un testimonio de la determinación del partido-Estado de proteger a sus ciudadanos de crímenes malvados y riesgos inciertos asociados a la transformación profunda de la sociedad china hacia una economía de mercado a partir de finales de 1970 (Miao, 2013). Sin embargo, lo que queda al centro del populismo es la sensación de desencanto y la desilusión en amplios sectores de la sociedad por la forma en que los gobiernos han ejercido el poder político, aparentemente confabulados con elites del sistema para favorecer a los indignos y los que no se lo merecen a su costa. Inicialmente, el sistema penal había sido un receptáculo útil para este «déficit de legitimidad»; la tensión y la ansiedad que se genera entre los que se sienten impotentes, ignorados o dejados atrás por la forma en que la clase dominante ejerce el poder (Beetham, 1991). En un intento por compensar y restaurar su legitimidad, los gobiernos estaban dispuestos a dirigir ese antagonismo hacia los criminales y prisioneros, foráneos impopulares que fueron útiles como chivos expiatorios. Sin embargo, a partir de entonces la mayor fuerza del populismo político ha sido el resultado de la forma en que dos de los elementos necesarios para el populismo penal se han arraigado mucho más en el tejido de la sociedad moderna. Estos no solo dan una textura distinta al hervidero ya existente de desconfianza e ira en que se sustenta el populismo, sino que garantiza que se expanda fuera del sector penal.

En primer lugar, *la inseguridad económica y la incertidumbre*. La crisis fiscal mundial del 2008 ha profundizado las desigualdades existentes en la sociedad moderna, provocadas por la globalización del comercio y el capital en la década de 1980, entre los ganadores de las economías de casino que se crearon y sus perdedores (Reiner, 2001). En cierto nivel, se pensaba que la crisis del 2008 impondría una mayor rectitud financiera sobre los gobiernos, bloqueando de este modo el populismo penal y su despilfarro financiero (Pratt, 2008). Si, hasta cierto punto, esto ha ocurrido⁸, la crisis tuvo un impacto mucho más profundo en la vida cotidiana que esto. En general, los ganadores siguieron ganando. De hecho, las ganancias de algunos de ellos crecieron en gran medida porque compraron inmuebles baratos o acciones que salieron al mercado en la recesión subsiguiente. Sin embargo, el número de perdedores aumentó en gran medida debido a inherentes despidos,

⁸ Ver nota 4 sobre la caída en las tasas de encarcelamiento de EEUU. Ver también Goode (2013).

una cesantía intermitente, el subempleo permanente o mermas en las condiciones de empleo para muchos otros, además de los recortes y restricciones en los gastos sociales.

Al mismo tiempo, las oportunidades de empleo en el sector público —antes un refugio seguro que ofrecía longevidad y seguridad, generosas pensiones y aumentos salariales regulares— disminuyeron significativamente como resultado de los nuevos límites impuestos a los gastos del gobierno después del 2008. La magnitud total de la cambiante naturaleza del mercado laboral, desde el inicio de la reestructuración en 1980 hasta la estrechez económica después de 2008 se refleja en la disminución del empleo en el sector público: del 27,6% de la fuerza laboral de Australia en 1989 al 16,5% en el 2014; del 25,9% en Nueva Zelanda en 1981 al 17,1% en el 2013; del 27,4% en el Reino Unido en 1980 al 17,2% en el 2015. Para muchos les espera el empleo en el sector privado, mucho más precario y quijotesco, si es que algo les espera. Las expectativas generales del progreso inexorable asociado a la modernidad, de superación, de mejorar siempre la calidad de vida, también se han evaporado. Así, el gobernador del Banco de Inglaterra ha advertido que Gran Bretaña está experimentando su primera *década perdida* de crecimiento económico durante 150 años [y que] los ingresos reales no han aumentado en los últimos diez años (citado en *el Daily Telegraph*, 6 de diciembre, 2016).

Esta *precariedad* (Standing, 2014) ha profundizado la desconfianza ya existente de las élites del sistema y organizaciones gubernamentales supranacionales, tales como el FMI, la UE, el Banco Mundial y así sucesivamente (para Donald Trump, la ONU se ha convertido en nada más que en «un club para pasarla bien»)⁹. Estas organizaciones son consideradas incapaces de evitar la crisis de 2008, atrapadas en ella sin poder hacer nada, o responsables de ella; pero todavía florecientes, a pesar de todo. La experiencia que profesan y sus asociaciones con la razón, la racionalidad y la ciencia ya ni siquiera se consideran sin valor. Por el contrario, tienen un valor negativo. Las condena a los ojos del público en general. «La gente en este país ha tenido suficiente de expertos», fue la afirmación hecha por el líder defensor de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea en el 2016, Michael Gove¹⁰.

⁹ Citado en el diario *Daily Mail*, 27 de diciembre del 2016.

¹⁰ Citado en el diario *The Financial Times*, 3 de junio del 2016.

Además, la crisis arrasó con las lealtades políticas tradicionales. Incluso la democracia ya no es vista como un don precioso de la modernidad, con garantías incorporadas de un buen gobierno. Por el contrario, se representa como un pantano de populistas que arrastra hasta sus profundidades a muchos ciudadanos meritorios, pero que no prosperan, mientras que los miembros del sistema siempre pueden encontrar rutas de escape. Los intentos para superar el déficit de legitimidad mediante la ampliación de los procesos democráticos solo generan desinterés y desprecio. En Gran Bretaña, las elecciones de Parlamento Europeo tienen una concurrencia menor al 50%, mientras que las primeras elecciones de comisarios locales de policía en ese país registraron una concurrencia inferior al 10% en algunas circunscripciones. Parece que es solo en plebiscitos, referendos y, en los EE.UU., que las propuestas de los ciudadanos son dignas de confianza y entendidas como expresiones auténticas de la voluntad pública. El referéndum 2016 Gran Bretaña-UE tuvo la participación electoral del 72%, en comparación con el 66% de las elecciones generales del 2015, y solo el 59% de 2001.

Segundo, *el surgimiento de un nuevo tipo de victimismo*. Esto es algo más que ser víctima de un delito, o el miedo de convertirse en una, lo cual los gobiernos han tratado de compensar con la promesa de castigos más estrictos para los autores. Aunque los clamores por ley y orden no han ocupado un lugar destacado en las últimas elecciones en esas sociedades —la caída de los delitos, sin duda, reduce esta demanda de alguna forma— los temores por determinados tipos de delitos o delincuentes, como el miedo a los pedófilos y depredadores sexuales, por ejemplo, en estos países de habla inglesa en especial, parecen más fuertes que nunca. Tales temores todavía dan cuenta del comportamiento de gran parte de la vida cotidiana y han llevado a la introducción de nuevas medidas preventivas que continúan erosionando las características fundamentales de la justicia penal en la sociedad moderna (Pratt, 2016). Sin embargo, análogamente esos temores se han combinado con los temores por la diferencia, los temores de la alteridad, los cuales han sido manifestados de diversas maneras por forasteros, extranjeros, inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados («Inmigrante discapacitado que presenta una cojera y usa muletas mientras mendiga en Londres es expuesto como fraude cuando se le ve caminando a comprar una comida para llevar», diario *The Sun*, 16 de septiembre del 2016). Temores y sospechas como estas son alimentados periódicamente por los atentados terroristas que dan una justificación adicional a tales preocupaciones y los peligros terribles que estos extraños podrían ser capaces de hacer, al tiempo que recuerdan a las víctimas potenciales de

su impotencia en tales ocasiones. Temores como estos continúan exigiendo más castigo, pero también exigen que se implementen más controles para proteger al público: mantener presos a los depredadores, incluso después de terminar sus condenas; perseguir a los pedófilos y alejarlos por completo de las comunidades locales; emitir órdenes de prohibición y restricción para alborotadores locales; construir barreras, muros y fortificaciones para alejar a quienes soliciten asilo, refugiados, extranjeros no deseados y todo el resto de estos forasteros; proteger las fronteras para que no puedan entrar; y acelerar los procesos de deportación una vez que hayan sido atrapados.

Estas son algunas de las respuestas a este nuevo tipo de victimismo, conforme al cual no solo el bienestar y la seguridad de las personas están en peligro, sino también del Estado-nación, dado que se cree que la inmigración masiva corroe sus valores, seguridad e identidad. En Gran Bretaña estas preocupaciones han sido impulsadas principalmente por inmigrantes de Europa del Este, ahora autorizados a mudarse a Gran Bretaña sin restricciones, ya que sus países se unieron a la UE en 2004, mientras que en los propios países de Europa del Este es el miedo a los que piden asilo y refugiados de Medio Oriente. En los EE.UU. es el miedo a «violadores y asesinos» mexicanos que cruzan la frontera en el sur y la inmigración de musulmanes (que para muchos estadounidenses es sinónimo de terrorismo) en general. Y así se podría seguir recopilando este inventario de miedo y sospecha, pasando de una sociedad moderna a otra.

Además de exigir medidas para-penales de protección e innovadoras, esta nueva forma de victimización sigue erosionando la confianza en las organizaciones supranacionales y las élites del sistema. Habiéndose posicionado, una vez más, por encima del caos cotidiano y la inseguridad que habían ayudado a crear, se cree que estas debilitan el Estado-nación mediante la imposición de valores y prácticas extranjeras no deseadas. Haney (2016) sostiene que los temores de Europa del Este de perder el control sobre los intereses nacionales es una consecuencia de la adhesión a la Unión Europea. Del mismo modo, en el Reino Unido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha convertido en uno de los símbolos más prominentes de la imposición de la diferencia europea no deseada en los valores y entendimientos británicos. Aparentemente este tiene el poder de insistir en que Gran Bretaña debería ser *europalizada* como crea conveniente, con su intervención en materia de justicia penal como símbolo de tales intrusiones peligrosas. En particular, la declaración del Tribunal de que la *prohibición absoluta*

británica de los derechos de voto de todos los prisioneros condenados, independientemente de la gravedad y circunstancias de sus delitos, viola el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos (*Hirst v Reino Unido* [N° 2] de 2005). Lo mismo sucede con las *cadena perpetua* (*Vinter y otros contra Reino Unido* [2013] CEDH), una decisión que refleja, según sostiene, *disparates de derechos europeos*, a diferencia del sentido común británico (Hastings, 2013).

Las consecuencias de la desregulación y el avance tecnológico aumentan el poder de los medios de comunicación para resaltar este tipo de intervenciones no deseadas y la distancia social que existe entre estas elites diletantes e ineficaces y «el pueblo», como si la voluntad de dicha entidad fuese ahora la única expresión auténtica de la autoridad. La respuesta del diario británico *Daily Mail* (4 de noviembre de 2016) a jueces del Tribunal de Apelaciones, que dictaminaron que el voto para salir de la UE en 2016 debía ser ratificado por el parlamento, fue etiquetarlos como *enemigos del pueblo* y *jueces desconectados* que «habían declarado la guerra a la democracia». Como muestra este ejemplo, la generación de noticias y el periodismo han roto el paradigma de la razón, la racionalidad y la verdad en la que se esperaba que operaran en las sociedades modernas y democráticas, sin importar lo laxo que haya podido ser este concepto anteriormente. No tiene límites ni normas éticas; tampoco una dirección establecida que lo frene o que tenga que seguir. La demanda de que se diga la verdad, como algunos periodistas trataron de insistir durante la elección de Estados Unidos del 2016, fue desestimada con réplicas de la campaña Trump de que esto era simplemente evidencia de *sesgo* en contra de ellos en los medios convencionales. De hecho, para el mismo Trump, los periodistas de la CNN y el *New York Times*, que defendían la verdad, eran «la forma más baja de la humanidad»¹¹.

Pero cuando se abandona la verdad, entonces todo puede ser una mentira: no hay forma de distinguir entre realidad y ficción; tampoco tiene sentido alguno hacerlo. Los proveedores de *noticias post-verdad* instan a sus críticos a demostrar que lo que dicen no es cierto. Hasta entonces, las mentiras y conspiraciones «siguen siendo una historia». Mentiras, mentiras, mentiras. Mentiras una y otra vez. «Señor, señor, cómo impera la mentira en este mundo»¹². Deja de lado la verdad y, así, la evidencia y los hechos solo se convierten en otro conjunto de mentiras.

¹¹ Citado por el diario *New York Times*, 12 de agosto del 2016.

¹² William Shakespeare, *Henry IV*, Parte I, Acto 5, Escena 4.

En lugar de utilizar la verdad para ganar votos, conjurar los demonios y diablos —que pueden ser fabricaciones en sí mismas— que deben ser confrontados por un hombre fuerte: entonces exigen que los votantes pongan su confianza en este hombre para librar al mundo de esta peste, en lugar de los políticos de carrera y decadentes burócratas que nada saben de las inseguridades que están detrás de este tipo de fantasías oscuras. En la situación actual, el ascenso de Facebook (2004) y Twitter (2006) desde la crisis del 2008 ha significado que las personas no solo pueden crear sus propias noticias e informar de ello como mejor les parezca, sino que publican para vastas audiencias. Una vez más, este nuevo tipo de noticias puede ser enteramente fabricado (*noticias alternativas*) y, por lo general, apunta a una vasta red de conspiración que se supone que existe, que trabaja para atrapar a los incautos y los vulnerables en su guarida. Como uno de los más prominentes activistas contra la Unión Europea en Gran Bretaña ha dicho, «mientras más escandalosos somos, más atención recibiremos. Mientras más atención recibamos, más escandalosos seremos» (citado por Rawsley, 2016a).

A través de estrategias como estas, los políticos populistas han llegado a ser prominentes. Si bien pueden tener penas más severas en sus agendas, esto es probable que sea solo un componente de un programa que, según ellos, por arte de magia va a transformar una sociedad entera: librarla de la corrupción y la ineficiencia, traer un futuro mejor a través de una reafirmación de la autoridad y la nación. Esto se ve más claramente en los temas de la campaña de los dos más espectaculares éxitos electorales populistas de 2016. Primero, el referendo Reino Unido-Unión Europea. Quienes estaban a favor de dejar la Unión Europea (UE) usaron el lema «Recupera el control», como si al votar por salir de la UE permitiese recuperar todo lo que se había perdido o robado, presumiblemente como resultado de la adhesión a la UE; sería posible restaurar la identidad nacional y librar al país de la corrupción y de la influencia extranjera *poco británica*; y sería un gesto de desafío contra los opositores. Se conjuró una visión de un pasado completamente mítico e irrecuperable de seguridad y cohesión, cuando los británicos eran dueños de su propio destino. ¿Cuándo se supone que sucedió esto? ¿Quién sabe? ¿Justo antes de que el Reino Unido se sumara a la UE en 1973? Pero ese fue un período de conflicto industrial masivo, con una creciente inflación y crecientes tensiones raciales (Hall et al., 1978). Este fue un momento en que el gobierno había *perdido* el control, por lo que no puede haber sido. Tal vez cuando había un imperio, o tal vez cuando había una poderosa Commonwealth blanca, o tal vez cuando Gran Bretaña (y las colonias) lucharon solos contra la Alemania

nazi, en lugar de someterse a las normas, leyes y reglamentos de la UE. La ruta a este nirvana involucraba alejarse de Europa, aunque, en realidad, no hacia un pasado glorioso, sino hacia un futuro incierto y con problemas.

Lo mismo sucede con «Hagamos América grande otra vez», la consigna de Trump en la elección de Estados Unidos. También en este caso, el lema transmite la sensación de pérdida y traición, atribuida a la corrupción en el gobierno central, financistas internacionales, los musulmanes, los mexicanos, la globalización y la infamia de individuos malvados (como la *torcida* Hillary Clinton). De ahí la necesidad de «secar el pantano», «construir un muro», «encerrar a Clinton» y así sucesivamente. Este tipo de proceso de purificación era necesario, al parecer, si se quería recrear el glorioso pasado, aunque no queda claro cuándo fue esto. No obstante, se podría reconstruir una sociedad en torno a hombres blancos dominantes, donde los empleos que existían antes de que la globalización los despidiera de alguna manera volverían a aparecer, y donde los extranjeros peligrosos quedarán fuera. En este sentido, la promesa implícita tanto de «Retoma el control» y «Hagamos América Grande de nuevo» fue no solo que la nación estaría segura frente a las amenazas insidiosas a su bienestar que el sistema había permitido, sino también que a los individuos se les devolvería lo que creían que les habían arrebatado: la familiaridad, la certeza, la seguridad.

EL FIN

Estos dos éxitos electorales fueron un shock profundo, angustioso e inquietante para muchos. Fueron tan inesperados. Como si la Razón resultara categórica frente a cualquiera sea el fundamento de la anti-razón, se sumaron distorsiones y noticias falsas. El presidente Obama había tratado de contrarrestar estos desafíos con una «oda a la razón, la racionalidad, la humildad y una gratificación retrasada» (citado por Packer, 2016, p. 84), un argumento para la renovación y la continuidad del *progreso estadounidense*. Sin embargo, luego de la derrota, y en medio de una gran oleada de delitos de odio, los abusos raciales e intolerancia racial que se había desatado a su paso, los intelectuales liberales se encontraron de repente frente a un cataclismo. Andrew Rawnsley (2016b), por ejemplo, sobre la votación para que Gran Bretaña abandone la UE, escribió que representaba «un viaje a lo desconocido para un país nunca antes tan dividido... entre la Gran Bretaña que lo está haciendo bien y la que queda atrás, entre la Gran Bretaña que esencialmente está cómoda con la globalización y la diversidad y la Gran Bretaña

que cree que sus ansiedades y rabia por la pérdida de identidad no han sido escuchadas». Sobre la elección de Trump, Richard Wolffe (2016) escribió que «será mejor que llamemos a esto lo que es: una revolución... Nada más logra captar la revuelta política y el caos que seguramente sigue... Una era que se remonta a Franklin D. Roosevelt acaba de llegar a un final abrupto y feo».

De hecho, la profundidad de estos eventos tiene un significado aún más profundo. Cada uno indica que el largo viaje que la propia modernidad había tomado desde la época de la Ilustración había llegado a un final demoledor. La derrota de la Razón —de la racionalidad, la ciencia, la verdad, la objetividad, la coherencia y su capacidad para estructurar e informar a los parámetros de la gobernabilidad en el mundo moderno— significa que solo espera lo desconocido. Esto no va a ser el final de la incertidumbre y la inseguridad prometida por los populistas, sino solo el inicio de nuevas incertidumbres e inseguridades, junto a la exacerbación de las ya existentes. Dicho esto, los dos eventos en sí no constituyen ningún *repentino* final de la Razón, sino que deben ser vistos como marcas de los momentos finales de un proceso cuyo fin se había vuelto inevitable, un proceso que había socavado sistemáticamente todo lo que había tratado de ofrecer la seguridad y la estabilidad, la cohesión y la solidaridad que de otro modo habrían sido lo suficientemente fuertes como para resistir los chamanes del populismo.

¿Cuándo comenzó este proceso? ¿Cuándo fue que todo lo que habíamos creído que era permanente, en realidad, no tiene durabilidad en absoluto, no tiene más sustancia que un castillo de arena construido para contener una marea entrante? En *Los cuatro cuartetos*, TS Eliot (1943, p. 23) escribió: «en mi comienzo está mi fin. Una tras otra. Las casas se levantan y se derrumban, se desmoronan, se extienden, son arrancadas, destruidas o restauradas». En el principio está el fin. ¿Dónde buscamos ese principio que llevó al final de la Razón? El punto de partida es probable que haya sido la reafirmación de la Razón posterior a 1945, su respuesta a las aberraciones de su camino en los estragos de los años de la depresión de las décadas de 1920 y 1930, seguido por el ascenso de hombres antidemocráticos fuertes en Europa que trajeron una catástrofe: matanzas, destrucción, miseria y genocidio. De ahí la frase que dominó el discurso político en las democracias después de 1945: *Nunca más*. Nunca más. Se convirtió en la tarea de los gobiernos de la posguerra asegurarse de que no se puede volver a la época anterior oscura de anti-razón nunca más.

¿Cómo se iba a garantizar la Razón contra cualquier aberración posterior? El Nuevo Trato de Roosevelt había prometido una mayor gestión gubernamental de la economía, ayuda a los pobres y el aumento del gasto público. A los neozelandeses se les prometió seguridad «de la cuna a la tumba» en su ley de Seguridad Social de 1938. El Informe Beveridge del Reino Unido (1942, p. 170) prometió controlar los riesgos e inseguridades erradicando a los «cinco grandes males: la escasez, la enfermedad, la ignorancia, la miseria y la ociosidad». Intenciones similares tenía el Informe Marsh de Canadá (1943) y el Libro Blanco del Empleo en Australia (1945). El Estado planificó esto rigurosamente para que estas promesas de un buen futuro fuesen ciertas, dando esperanza a todos. En 1943 Beveridge (citado por Kynaston, 2007, p. 31) había anticipado que cuando llegara la paz, «la primera cosa por ganar es la Batalla de la Planificación. Tendremos que tener una planificación a escala nacional, superando con valentía los límites tradicionales de los consejos urbanos, consejos rurales y de condado». Del mismo modo, el Informe Marsh (1943, p. 7) explicó que «el trasfondo previo a la guerra no ha sido olvidado por muchos canadienses [...] y no debe ser olvidado en el período posterior a la guerra, en la planificación anticipada de las medidas que se deben tomar [...] para hacer realidad las aspiraciones y esperanzas que los pueblos del mundo piden con cada vez más claridad».

De ahí la forma física, material e ideológica de la sociedad de posguerra. La ciudad moderna se convertiría en un refugio donde todos tenían un lugar que les corresponde, se convertiría en un testimonio de las virtudes de la planificación, de la racionalidad, un testimonio de las virtudes de la Razón misma; su celebración de espacio público sería una característica necesaria de la vida comunitaria armoniosa. Por ejemplo, la visión de Ebenezer Howard (1946, p. 44) sobre «la ciudad social» se basó en torno a amplias avenidas cubiertas por árboles, casas, jardines públicos y un parque central. «Grandes edificios públicos estarían en [su] centro: la municipalidad, la biblioteca, museo, sala de conciertos y conferencias, el hospital. Aquí se reúnen los valores más altos de la comunidad: la cultura, la filantropía, la salud y la cooperación». La vida familiar también tenía una importancia más allá de las personas en sí. Ahora sería ordenada y estructurada por el gobierno y sus nuevas organizaciones de asistencia para asegurar que el bienestar de los individuos contribuya al bienestar de la sociedad en su conjunto: «La paternidad en sí debe convertirse en un interés central, en un deber; y la familia y el grupo primario de trabajadores y vecinos deben convertirse en un núcleo vital de cada asociación mayor» (Mumford, 1945, p. 214). En 1950 había alrededor

de 100 centros de orientación matrimonial en funcionamiento en Gran Bretaña para proporcionar la orientación y dirección necesarias para aquellos con problemas para satisfacer estas expectativas (Clark, 1991).

Lo que más importaba en la disposición de este extenso aparato de apoyo e instrucción, de acuerdo con el sociólogo británico líder de este periodo, T.H. Marshall (1950, p. 56), «es que hay un enriquecimiento general de la sustancia concreta de la vida civilizada, una reducción general del riesgo y la inseguridad, una homogeneización entre los más y menos afortunados en todos los niveles». De hecho, la vasta fuerza de trabajo del sector público que sería necesaria para lograr todos estos objetivos en sí misma fue de cierta manera logrando esto, proporcionando garantías de seguridad en el empleo y de estatus (en el Reino Unido, por ejemplo, los funcionarios públicos aumentaron de 340.000 a 720.000 entre 1931 y 1955; Marwick, 1971, p. 137). Estas garantías no se presagiaban en torno a una vida especialmente ambiciosa, no una vida que se viviría por la vía rápida, disfrutando frenéticamente de placeres e indulgencias, sino una buena vida a pesar de todo, una vida que ahora ofrecía comodidad en lugar de dificultades, una vida para ser apreciada más que abandonada a su propio destino. Y el futuro parecía asegurado en ese momento. En Gran Bretaña, una encuesta de opinión del diario *Daily Telegraph* (27 de diciembre, 1961) que apuntaba a personas de 16 a 18 años de edad arrojó que solo el 9% no estaba de acuerdo con la opinión de que «el mundo sería un lugar mejor para vivir dentro de 10 años». En un mundo de estabilidad y seguridad, lo que llama la atención en particular en las otras respuestas de los encuestados es la regularidad de sus hábitos de trabajo. Después de tres años, más de la mitad estaban todavía en el mismo empleo que cuando comenzaron. Además, uno de cada tres asistía regularmente a la iglesia. Solo uno de cada diez no tenía muchas ganas de casarse; el 85% no estuvo de acuerdo con la afirmación de que no importaba mucho si el matrimonio funcionaba muy bien.

Sin embargo, los mismos éxitos de este proyecto solidario de la posguerra (Garland, 1996) empezaron a roer sus bases. La certeza y estabilidad en la vida personal y las relaciones fueron las primeras en desmoronarse, a la luz de una demanda mucho mayor de expresión de las elecciones personales respecto a las preferencias sexuales y de identidad. El resultado fue que la vida familiar, que se había dado por hecho, y todas las redes tejidas en torno a ella, se volvieron mucho más tangenciales, como se ha señalado. ¿Qué papel podrían tener todas las clínicas de orientación matrimonial ahora a la luz de la realidad de la vida familiar? Como Ulrich Beck (citado en Bauman, 2000, p. 6) escribió, «pregúntese, ¿qué es

realmente una familia hoy en día? ¿Qué significa? Por supuesto, hay niños, mis hijos, nuestros hijos. Pero incluso la paternidad, el núcleo de la vida familiar, está comenzando a desintegrarse a través del divorcio [...] abuelas y abuelos son incluidos y excluidos sin forma alguna de participar en las decisiones de sus hijos e hijas». Muchos otros caen en lo que se han convertido en estas redes completamente endeble y viven solos, una de las características más significativas de la demografía actual en la sociedad moderna¹³. Cualesquiera que sean las historias personales detrás de esto —por elección o desgracia, por accidente o el cruel destino—, la creciente presencia de este grupo más que cualquier otro representa la atomización de la vida cotidiana en la sociedad moderna y la importancia de las estructuras de apoyo y orientación más allá de la familia para proporcionar interdependencias y unirse al resto de la sociedad. En una era en la que ahora todos tenemos para «funcionar en el margen exterior del mundo ordenado, en la última frontera bárbara de la tecnología moderna» (Giddens, 1999, p. 2), cuando todos estamos involucrados con complejos sistemas sociales, económicos y tecnológicos que no entendemos, muchos han sido abandonados a su suerte para tratar de digerir y resolver los dilemas existenciales y conflictos que estos producen en sí mismos.

Esto se debe a que, además de la naturaleza cambiante de la vida familiar, las estructuras extra-familiares también comenzaron a derrumbarse desde la década de 1980, como lo indica Robert Putnam (2000) en *Bowling Alone*. Ahora se afirma que el proyecto solidario de la posguerra fue ineficiente y que socavó la energía de los individuos para hacer su propio camino en el mundo, hacer sus propias fortunas y gastarlas a su antojo, en lugar de que el Estado les dijera lo que podrían hacer. Aunque, por supuesto, también tendrían que manejar sus propios riesgos, para bien o para mal. A partir de entonces, en medio de una baja en la asistencia a la iglesia, el voluntariado, la afiliación sindical y el cumplimiento de las obligaciones cívicas, la desregulación y la globalización no solo hicieron que las perspectivas de empleo fuesen menos predecibles y permanentes, más inciertas y contingentes, sino que la reconstrucción concomitante de las comunidades y el movimiento de la mano de obra también comenzaron a disolver la cohesión local, los lazos y responsabilidades: «La cultura empresarial resultó ser un disolvente de los vínculos de confianza y de la comunidad y una fuente de inseguridad

¹³ El porcentaje de personas que viven solas ha aumentado de 18,8% de la población australiana en 1986 a 23% en 2013; de 11,4% en Canadá en 1981 a 27,6% en 2011; de 16% en Nueva Zelanda en 1980 a 23,5% en 2013; de 22% en el Reino Unido en 1981 a 28% en 2014; de 22,7% de EEUU en 1980 al 27,4% en 2012.

para muchos. La movilidad que exige una economía de mercado dinámica no se reconcilia fácilmente con una vida común establecida. El resultado final fue el debilitamiento o la disolución de los lazos de la comunidad y la generación de una sociedad de extraños» (Gray, 1993, p. 54).

Sin embargo, se dio mayor atención pública y política —especialmente en los principales países de habla inglesa que estaban a la vanguardia de estos cambios— a la celebración de la fama y la fortuna de los ganadores generados por esta reestructuración económica. Los perdedores, todos aquellos dejados atrás o aquellos que no podían seguir el ritmo de los cambios, se vieron en gran parte dejados de lado. Estas crecientes divisiones, la creciente tensión entre aquellos perpetuamente en movimiento¹⁴, subiendo por una escalera mecánica que se extiende cada vez más y que ofrece cada vez más riqueza y éxito en cada nuevo nivel; y aquellos que se quedaron fuera, perpetuamente atrapados en el rincón de las gangas de la sociedad moderna, sintiéndose agraviados por gobiernos que parecían tener muy poco interés en ayudarles a llegar a incluso el siguiente nivel, instruyeron el desarrollo del populismo penal.

La introducción de sanciones y controles innovadores, así como castigos más extensivos e intensivos para quienes parecían ser la amenaza más evidente y directa al bienestar individual, era una forma simple y de sentido común, aunque cara (requiere recortes en los gastos de otras medidas sociales y de bienestar), para que los gobiernos demostraran que no habían olvidado a los ciudadanos meritorios, pero dejaron fuera al electorado. De hecho, ahora estaban preparados para hablar su lenguaje de castigo, en lugar de aquel de sus antiguos expertos, en el nuevo eje del poder penal que empezó a poner estas medidas en vigor. Esta era la manera, al menos temporalmente, de unificar la población, para sanar las divisiones y restaurar la cohesión social. Si esto fue a expensas de muchos de los principios en los que se había construido la justicia penal en la sociedad moderna, entonces esto se podría explicar fácilmente («reequilibrio del sistema de justicia criminal», los nuevos controles eran «solo para los peores de los peores», solo le importará a las elites liberales utópicas; ver Pratt, 2016).

¹⁴ Ver Bauman (2001, p. 62): «Los individuos que no están atados a un lugar, que pueden viajar ligero y moverse rápidamente, ganan todas las competencias que importan y que cuentan».

Sin embargo, como hemos visto, el populismo penal resultó ser solamente una parada en una marcha mucho más populista a través de la sociedad moderna. El aumento de la potencia de las amenazas al bienestar individual y nacional significó que el populismo era capaz de salir fuera de los límites de la zona de penal y impregnar todo el cuerpo social. Esto no significa que ahora ya terminó con su transformación de las posibilidades de castigo. A medida que aumenta la ansiedad, la incertidumbre y el aumento de la inseguridad, a medida que la criminalidad se combina con la alteridad, igualmente el derecho penal y el castigo se vuelven más diversos y amorfos, tratando de controlar cada vez más el riesgo en lugar de limitarse solo a reprimir el delito. De este modo, los límites que antes habían separado el castigo en la sociedad moderna del castigo en sociedades no-democráticas y totalitarias se erosionan aún más.

Esto, sin embargo, es un asunto de poca trascendencia para el populismo y sus fuerzas. Lo que lo impulsa no es ningún legado de la Razón y la Ilustración, sino la ira, el resentimiento y la construcción de una política mágica en torno a estas fuerzas emotivas que promete eliminar de golpe todos los demonios y diablos que identifica. En «Retomar el control», en «Hacer una nación grande otra vez», ¿quién necesita el compromiso de Obama de «tolerancia, consenso y nuestra condición humana [...] los valores de la democracia liberal» (Packer, 2016) para lograr esto? ¿Quién necesita evidencia, la racionalidad, la ciencia y todos los demás atributos en los que la propia modernidad se había construido, para hacer esto? Sin embargo, como escribe Jonathan Freedland (2016), «la evidencia, los hechos y la razón son los elementos fundamentales de la civilización. Sin ellos, nos sumergimos en la oscuridad». Y esta oscuridad cae, y trae consigo el fin de la Razón y toda su luz.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bauman, Z. (2000). *Liquid Modernity*. Cambridge: Polity Press.
- Bauman, Z. (2001). Violence in the age of uncertainty. In A. Crawford (Ed.), *Crime and Insecurity* (pp. 52–74). London: Routledge.
- Beccaria, C. (1872). *On Crimes and Punishments*. Albany, NY: W.C. Little & Co. (Original work published in 1764)
- Beck, U. (1992). *Risk Society: Towards a New Modernity*. London: Sage.
- Beetham, D. (1991). *The Legitimation of Power*. Basingstoke: Macmillan.
- Betz, H.G. (1994). *Radical Right-Wing Populism in Western Europe*. Basingstoke: Macmillan.
- Beveridge, W.H. (1942). *Social Insurance and Allied Services: Report [The Beveridge Report]*. London: HMSO. [Cmd. 6404]
- Bottoms, A.E. (1977). Reflections on the Renaissance of Dangerousness. *Howard Journal of Criminal Justice*, 16, 70–96.
- Bottoms, A.E. (1995). The philosophy and politics of punishment and sentencing. In C. Clarkson & R. Morgan (Eds), *The Politics of Sentencing Reform* (pp. 17– 49). Oxford: Clarendon Press.
- Canovan, M. (1981). *Populism*. New York, NY: Harcourt Brace Jovanovich.
- Clark, D. (1991). Guidance, counselling, therapy: Responses to «marital problems» 1950–90. *The Sociological Review*, 39(4), 765–798.
- Commonwealth of Australia (1945). *Full Employment in Australia*. Canberra: Australian Government Printer.
- Diderot, D. (1753/1966). On the interpretation of Nature, No. 15. In L. Crocker (Ed.), *Diderot's Selected Writings*. New York, NY: Macmillan. (Original work published in 1753).
- Diderot, D. (1967). *Denis Diderot's The Encyclopedia: Selections* (S.J. Gendzier, Ed. & Trans.). New York: Harper Torchbooks (Original work published in 1751)
- Eliot, T.S. (1943). *Four Quartets*. New York, NY: Harcourt, Brace & Co.
- Farrell, G., Tilley, N. & Tseloni, A. (2014). Why the crime drop? *Crime and Justice*, 43(1), 421–490.
- Freedland, J. (2016, November 9). The US has elected its most dangerous leader. We all have plenty to fear. *The Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/09/donald-trump-us-president-nightmare>
- Garland, D. (1996). The limits of the sovereign state: Strategies of crime control in contemporary society. *British Journal of Criminology*, 36, 445–471.

- Giddens, A. (1991). *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Cambridge: Polity Press.
- Giddens, A. (1999). Risk and responsibility. *Modern Law Review*, 62(1), 1–10.
- Goode, E. (2013, July 25). US prison populations decline, reflecting new approaches to crime. *The New York Times*. Retrieved from <http://www.nytimes.com/2013/07/26/us/us-prison-populations-decline-reflecting-new-approach-to-crime.html>
- Gray, J. (1993). *Beyond the New Right: Markets, Government and the Common Environment*. London: Routledge.
- Hall, S. (1979). *Drifting into a Law and Order Society*. London: Cobden Trust.
- Hall, S. (1988). *The Hard Road to Renewal: Thatcherism and the Crisis of the Left*. London: Verso.
- Hall, S., Critcher, C., Jefferson, T., Clarke, J. & Roberts, B. (1978). *Policing the Crisis. Mugging, the State and Law and Order*. New York, NY: Palgrave Macmillan.
- Haney, L. (2016). Prisons of the past: Penal nationalism and the politics of punishment in central Europe. *Punishment & Society*, 18(3), 346–368.
- Hastings, M. (2013, July 10). The danger is we've become immune to human rights lunacy. It's vital we stay angry, says Max Hastings. *Daily Mail*. Retrieved from <http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2359048/The-danger-weve-immune-Human-Rights-lunacy-Its-vital-stay-angry-says-MAX-HASTINGS.html>
- Hay, D. (1976). Property, authority and the criminal law. In D. Hay, P. Linebaugh & E.P. Thompson (Eds.), *Albion's Fatal Tree: Crime and Society in 18th Century England* (pp. 17–63). London: Allen Lane.
- Home Office (1959). *Penal Practice in a Changing Society*. London: HMSO. [Cmnd. 645]
- Home Office (1988). *Punishment, Custody and the Community*. London: HMSO. [Cm 424]
- Howard, C. & Morris, N. (1964). *Studies in Criminal Law*. London: Oxford University Press.
- Howard, E. (1946). *Garden Cities of To-morrow*. London: Faber & Faber.
- Jewkes, Y. (2004). *Media and Crime*. London: Sage.
- Johnson, D.T. (2006). Japan's secretive death penalty policy: Contours, origin, justifications, and meanings. *Asia-Pacific Law & Policy Journal*, 7, 62–124.
- Jones, T. & Newburn, T. (2006). *Policy Transfer and Criminal Justice*. London: Open University Press.
- Kant, I. (1797/1887). *The Philosophy of Law: An Exposition of the Fundamental Principles of Jurisprudence* (W. Hastie, Trans.). Edinburgh: T & T Clark.
- Koo, K.C., Ahn, J.H., Hong, S.J., Lee, J.W. & Chung, B.H. (2014). Effects of chem-

- ical castration on sex offenders in relation to the kinetics of serum testosterone recovery: Implications for dosing schedule. *Journal of Sexual Medicine*, 11(5), 1316–1324.
- Kynaston, D. (2007) *Austerity Britain, 1945–51*. London: Bloomsbury.
- Lacey, N. (2008). *The Prisoners' Dilemma: Political Economy and Punishment in Contemporary Democracies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Locke, John (1690/2016). *Second Treatise of Government*. Los Angeles, CA: Enhanced Media.
- Marsh, L. (1943). *Report on Social Security for Canada [The Marsh Report]*. Ottawa: King's Printer.
- Marshall, T.H. (1950). *Citizenship and Social Class*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Marwick, A. (1971). *The Explosion of British Society, 1914–1970*. London: Macmillan.
- Miao, M. (2013). Capital punishment in China: A populist instrument of social governance. *Theoretical Criminology*, 17(2), 233–250.
- Montesquieu, C. (1914/2011) *The Spirit of Laws* (T. Nugent, Trans.). New York, NY: Cosimo Classics.
- Müller, M.M. (2012). The rise of the penal state in Latin America. *Contemporary Justice Review*, 15(1), 57–76.
- Mumford, L. (1945). *City Development: Studies in Disintegration and Renewal*. New York, NY: Harcourt, Brace & Co.
- Neto, L. (2009). The penal populism in Spain: from welfare state to punishment state. http://www2.pucpr.br/ssscla/papers/SessaoC_A33_pp219-245.pdf
- Nevitte, N. (1996). *The Decline of Difference: Canadian Value Change in Cross National Perspective*. Peterborough, ON: Broadview Press.
- New Zealand First. (2014). *Manifesto*. Wellington: Government Printer.
- Packer, G. (2016, October 31). Hillary Clinton and the populist revolt, *New Yorker Magazine*. Retrieved from <http://www.newyorker.com/magazine/2016/10/31/hillary-clinton-and-the-populist-revolt>
- Paine, T. (1794). *The Age of Reason: Being an Investigation of True and Fabulous Theology*. Paris: Barrois.
- Pratt, J. & Clark, M. (2005). Penal populism in New Zealand. *Punishment and Society*, 7, 303–322.
- Pratt, J. (1997). *Governing the Dangerous*. Sydney: Federation Press.
- Pratt, J. (2000). Emotive and ostentatious punishment. *Punishment & Society*, 2(4), 417–439.

- Pratt, J. (2007). *Penal Populism*. New York, NY: Routledge.
- Pratt, J. (2008). *When Penal Populism Stops. Legitimacy, Scandal and the Power to Punish in New Zealand*. *Australian and New Zealand Journal of Criminology* 41, 364-383.
- Pratt, J. (2016). Risk control, rights and legitimacy in the limited liability state. *British Journal of Criminology*, Advance online publication. doi:10.1093/bjc/azw065
- Putnam, R. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York, NY: Simon and Schuster.
- Rawnsley, A. (2016a, November 20). The shock lessons for liberals from Brexit and the Trumpquake. *The Observer*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/20/lessons-liberals-brexit-trumpquake-demagogues-rules-electoral-politics>
- Rawnsley, A. (2016b, June 26). Brexit: A Journey into the unknown for a country never before so divided, *The Observer*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jun/26/brexit-eu-referendum-disunited-kingdom>
- Reiner, R. (2001). The rise of virtual vigilantism: Crime reporting since World War II, *Criminal Justice Matters*, 43, 4-5.
- Report of the Penal Policy Review Committee, 1981 (1982). Wellington, NZ: Government Printer.
- Roberts, J.V., Stalans, L., Indermaur, D. & Hough, M. (2003). *Penal Populism and Public Opinion*. New York, NY: Oxford University Press.
- Ruggles-Brise, Sir E. (1921). *The English Prison System*. London: Macmillan.
- Shils, E. (1956). *The Torment of Secrecy*. London: Heinemann.
- Standing, G. (2014). *The Precariat. The New Dangerous Class*. London: Bloomsbury.
- Tappan, P. (1957) Sexual offences and the treatment of sexual offenders in the United States. In L. Radzinowicz (Ed.), *Sexual Offences. A Report of the Cambridge Department of Criminal Science* (pp. 500-516). London: Macmillan.
- Tyler, T. & Boeckmann, R. (1997). Three strikes and you are out, but why? The psychology of public support for punishing rule breakers. *Law and Society Review*, 31: 237-265.
- von Hirsch, A. (1976). *Doing Justice*. New York, NY: Hill & Wang.
- Wolffe, R. (2016, November 9). Trump's victory is nothing short of a revolution, *The Guardian*, Retrieved from <https://www.theguardian.com/com>

mentisfree/2016/nov/09/donald-trump-victory-us-election-result-revolution

Zimring, F.E. (2012). *The City that became Safe: New York's Lessons for Urban Crime and its Control*. New York, NY: Oxford University Press.

PENAL POPULISM: THE END OF REASON

By JOHN PRATT AND MICHELLE MIAO

THE AUTHORS

John Pratt

LLB (Hons) (London University), MA (Keele University), PhD (University of Sheffield)

Fellow of the Royal Society of New Zealand.

Professor of Criminology, Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand.

E-mail: john.pratt@vuw.ac.nz

John Pratt is Professor of Criminology at the Institute of Criminology, Victoria University of Wellington, New Zealand. His qualifications are LLB (Hons) (London), MA (Keele), and PhD (Sheffield). His fields of research are comparative penology and the history and sociology of punishment. He has published in eleven languages and has been invited to lecture at universities in South America, North America, Europe, Asia and Australia. His books include *Punishment and Civilization* (2002), *Penal Populism* (2007) and *Contrasts in Punishment* (2013). In 2008 he was awarded the Royal Society of New Zealand James Cook Research Fellowship in Social Science. In 2009 he was awarded the Sir Leon Radzinowicz Prize by the Editorial Board of the *British Journal of Criminology*. In 2010 he was invited to take up a one year Fellowship at the Straus Institute for Advanced Studies in Law and Justice, New York University. In 2012 he was elected to a Fellowship of the Royal Society of New Zealand. In 2013 he was awarded the Society's Mason Durie Medal, given 'to the nation's pre-eminent social scientist.'

Michele Miao

LLB (East China University of Politics and Law, Shanghai), LLM (Renmin University, China), LLM (New York University), DPhil (Oxford University).

Assistant Professor of Law, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, China

E-mail: michellemiao@cuhk.edu.hk

Michelle Miao is an Assistant Professor in the Faculty of Law, Chinese University of Hong Kong. Her qualifications are LLB (East China University of Politics and Law, (Shanghai), LLM (Renmin University, China), LLM (New York University), D Phil (Oxford University). Her research interests are the intersections between the domains of criminology, human rights, socio-legal studies and international law. Prior to her appointment at the Chinese University of Hong Kong, She was a British Academy Postdoctoral Fellow at the University of Nottingham's School of Law and a Global Research Fellow at New York University School of Law. Before then, she was a Howard League Research Fellow at Oxford University. She has published her research in prestigious international journals including the *British Journal of Criminology* and *Theoretical Criminology*.

SUMMARY

Introduction

Punishment, Reason and Anti-Reason

Explaining the rise of penal populism

Legitimacy deficits and the rise of populist politics

The end

ABSTRACT

Penal populism has become a much discussed characteristic of punishment in modern society. Most such commentaries, however, take the rather myopic view that this phenomenon represents some localized event within the social body, to be diagnosed, theorized and exorcized there. This article, however, argues that the emergence of penal populism is neither the endpoint of nor the limits to populism and its consequences in modern society. Rather, it marks only the beginnings of its more general resurgence in the early twenty first century. In these respects, penal populism should be understood as only a convenient incubating phase in which populist forces found vigour and strength before flowing much deeper into mainstream society from that gestation. If it might be thought that penal populism represents an attack on the long established link between reason and modern punishment, this has been only the prelude to the way in which a much more free flowing political populism now threatens to bring an end to Reason itself, the foundation stone of modernity. This shift from penal to political

populism has been precipitated by two interconnected factors: the impact of the 2008 global fiscal crisis and the mass movement of peoples across the globe. The article concludes with a discussion of how political populism continues to transform punishment in modern society, as well as the broader social consequences and implications of its emergence.

KEYWORDS

penal populism — reason — punishment — risk — politics — insecurity

INTRODUCTION

The phenomenon of penal populism was first identified as a characteristic of English speaking Western democracies around the end of the twentieth century—specifically, the USA, UK, New Zealand, Australia and Canada (see Roberts et al, 2003; Pratt, 2007). Since that time, however, various strands of it—the exact form that it takes and the impact it has varies from society to society—have been identified in a diverse range of countries. Generally, it demands a much more punitive approach to law breaking. This has been manifested in the form of dramatically rising imprisonment rates, as in the Anglophone world; but it has also led to clamourings for more vigorous use of the death penalty in some Asian societies, particularly Japan (Johnson, 2006), or chemical castration of child sex offenders, as in South Korea (Koo et al, 2014) and the Czech Republic (Haney, 2016).

With each society it touches, it is as if penal populism undermines the very kernel on which modern punishment had been built: the way in which, from the time of the Enlightenment, science, rationality and expert knowledge were expected to outweigh emotive, uninformed common-sense, thereby ensuring that reason outweighed anti-reason in the development of penal policy. Now, though, slamming the door in the face of reason, penal populism drives up imprisonment rates when the detrimental effects—social and economic—of imprisonment are well known; or it reaffirms the place of capital punishment in modern penal systems when it is well known that there is no conclusive evidence about its deterrent effect; or it targets the bodies of offenders, in a reversion to punishment of the premodern era, rather than compelling them to forfeit time or money in line with the expectations of punishment in the modern world.

Most analyses of these developments have treated penal populism as a kind of localized event within the social body, as an aberration from the direction of punishment in modern society, as an infection that can be diagnosed, provided with treatment and exorcized: at which point, it is thought, the voice of reason will once again be allowed to drive modern penal arrangements in a progressive, humane direction and away from such excesses (Roberts et al, 2003; Pratt, 2008; Neto, 2009; Müller, 2010). There is, though, a myopia to these approaches. It is as if populism has burrowed into this sector of modern society alone and is then somehow confined there. It may wreak havoc in that location, but it cannot es-

cape from it. This article, however, argues that the emergence of penal populism is neither the endpoint of nor the limits to populism and its consequences in modern society. Rather, it marks only the beginnings of its more general resurgence in the early twenty first century. In these respects, *penal populism* should be understood as only a convenient incubating phase in which populist forces found vigour and strength before flowing much deeper into mainstream society from that gestation. And penal populism was only a warning of the much greater chaos that was to come when populism was fully unleashed. If it might be thought that penal populism represents an attack on the long established link between reason and modern punishment, this has been only the prelude to the way in which a much more free flowing *political populism* now threatens to bring an end to Reason itself, the foundation stone of modernity.

The article begins with an examination of the way in which, around the early 1990s, populism initially surfaced in the penal systems of the main English speaking countries. It then argues that the shift from penal to political populism has been precipitated by two interconnected factors. First, the impact of the 2008 global fiscal crisis that greatly exacerbated the way in which globalization had eroded economic security. Large sections of modern society have since been left resentful and marooned in their own helplessness before such forces, while governments seem unmoved by or oblivious to their concerns. Second, threats to both individual and national identity brought about by the mass movement of peoples across the globe—from East to West, North to South and South to North. As this has occurred, crime is no longer the main signifier of threats to well-being and the breakdown of order and authority. Rather, crime concerns have become conflated with concerns about ‘difference’ and ‘otherness’—of which being a stranger, a foreigner, or an immigrant, legal or otherwise, have become one of the most potent symbols.

Beyond the controls of the penal system itself, there are thus demands that borders have to be defended, new boundaries need to be put in place—walls, electric fences, surveillance mechanisms have to be built or installed, terrorists must be ‘eliminated’ and registers have to be kept of those with suspect religions or ethnicities to meet these more diffuse, amorphous threats. Individuals and organizations that stand in the way of what seem to be these necessary defences to individual and national health—on civil liberties or humanitarian grounds usually—are cast as traitors and ‘enemies of the people’, a people now prepared

to look beyond existing democratic structures and modes of governance for solutions to restore security. In so doing, they are prepared to abandon Reason and put their trust in populist politicians to take them along a path—their leaders have no need of roadmaps or itineraries to guide them, they just tell their followers to have trust and belief in them—that will make them safe from such existential threats.

PUNISHMENT, REASON AND ANTI-REASON

The Age of Reason announced the dawn of modern society. A world without reason, John Locke (1690/2016, p. 89) had written, gives rise to ‘despotal power ... which neither nature gives, for it has made no such distinction between one man and another; nor compact can convey: for man not having such an arbitrary power over his own life, cannot give another man such a power over it; but it is the effect only of forfeiture, which the aggressor makes of his own life, when he puts himself into the state of war with another: for having quitted reason, which God hath given to be the rule betwixt man and man, and the common bond whereby human kind is united into one fellowship and society; and having renounced the way of peace which that teaches, and made use of the force of war, to compass his unjust ends upon another, where he has no right; and so revolting from his own kind to that of beasts, by making force.’

Reason, it was thought by Locke and subsequent Enlightenment scholars, would thus bring an end to the tyranny, absolutism and arbitrariness in the exercise of sovereign power in the premodern world, the world without Reason: ‘the freedom then of man, and liberty of acting according to his own will, is grounded on his having reason, which is able to instruct him in that law he is to govern himself by, and make him know how far he is left to the freedom of his own will’ (Locke, 1690/ 2016, p. 35). For Thomas Paine (1794, p. 1), ‘the most formidable weapon against errors, of every kind, is reason. I have never used any other, and I trust I never shall.’ Similarly, Montesquieu (1914/ 2011, p. 6): ‘law in general is human reason, inasmuch as it governs all the inhabitants of the earth: the political and civil laws of each nation ought to be only the particular cases in which human reason is applied.’

But if reason was to bring justice for all, it must also bring an end to the inconsistencies and uncertainties of the criminal justice order that reinforced the premodern exercise of sovereign power through brutal, public punishments to the human body: ‘we must overturn the barriers that reason never erected’, Diderot (1751/1967, p. 93) argued. To do so, legal theory had to disengage itself from the previous associations it had made between Divine Law and the absolute monarchs who had ruled the pre-modern world. From being some mysterious, incalculable and unpredictable force, decipherable only to those who ruled, law became, instead, man made. It represented a contract between all citizens in a society rather than the dictates of a despot: ‘laws which surely are, or ought to be, compacts of free men, have been, for the most part, a mere tool of the passions of some, or have arisen from an accidental and temporary need. Never have they been dictated by a dispassionate student of human nature’ (Beccaria, 1764, p. 12). The quest of legal theory then became one of showing what law *ought* to be, rather than what the Sovereign decreed it to be. It ought to provide security and order for all rather than merely the sovereign; and it ought to provide fundamental rights protected in inviolable ideas of justice that no ruler or government would be able to take away in the future. Beccaria (1764, p. 24) thus argued that law had to be made certain and knowable to all and applicable to all, in the form of criminal codes: ‘when a fixed code of laws, which must be observed to the letter, leaves no further care to the judge than to examine the acts of citizens and to decide whether or not they conform to the law as written: when the standard of the just or the unjust, which is to be the norm of conduct for all; then only are citizens not subject to the petty tyrannies of the many which are the more cruel as the distance between the oppressed and the oppressor is less, and which are far more fatal than that of a single man, for the despotism of many can only be corrected by the despotism of one; the cruelty of a single despot is proportional, not to his might, but to the obstacles he encounters.’

In drafting these codes, science and rationality began to be applied to criminal justice. Rather than making law on the basis of the religiosity of priests or the sycophancy of courtiers, Diderot (1753/1966, p. 30) wrote that, in the Age of Reason, ‘there are three principal means of acquiring knowledge ... observation of nature, reflection, and experimentation. Observation collects facts; reflection combines them; experimentation verifies the result of that combination. Beccaria (1764/1872, p. 46) thus urged that punishment should be efficient rather than spectacular. It should be proportionate to the crime committed rather than un-

necessarily brutal: ‘the intent of punishments is not to torment a sensible being, nor to undo a crime already committed ... Can the groans of a tortured wretch recall the time past, or reverse the crime he has committed?’ Rather than simply being a demonstration of sovereign power, ‘the end of punishment, therefore, is to prevent others from committing the like offence’ (ibid, p. 47). This meant that the amount of punishment should be proportionate to the crime committed: ‘if an equal punishment be ordained for two crimes that injure society in different degrees, there is nothing to deter men from committing the greater’ (ibid, p. 32).

Kant (1797/1887, p. 195) then reinforced what the limits to modern punishment should be: ‘[it] can never be administered merely as a means for promoting another Good, either with regard to the Criminal himself or to Civil Society, but must in all cases be imposed only because the individual on whom it is inflicted has committed a crime.’ It was not only that there should be no punishment of the innocent; in addition, punishment of the guilty had to be an end in itself: punishment inflicted for other purposes might only lead to the excesses and iniquities redolent of the pre-modern era: ‘what, then, is to be said of such a proposal as to keep a Criminal alive who had been condemned to death, on his being given to understand that if he agreed to certain dangerous experiments being performed on him, he would be allowed to survive if he came happily through them?’ (ibid, p. 196). Normative prescriptions for the operation of criminal law and punishment in modern society were initially set down and developed through the work of such scholars. From there, matters of law enforcement and punishment would be determined by secular experts, able to draw on collections of government statistics from the early nineteenth century to make scientific judgments when determining policy and its likely effects.

This did not then mean, of course, that Reason-driven policy and this alone made a straightforward linear progression throughout the modern period. It faced numerous impediments and took numerous detours. The emotive force and symbolic power of punishments to the human body (Hay, 1976) meant that the death penalty was not removed from the penal agendas of the main English speaking societies until the 1970s. The emphasis on fixed and certain punishments did not preclude the introduction of indeterminate sentencing laws around the beginning of the twentieth century (Pratt, 1997). The initial emphasis on punishment as retribution gave way to a focus on treatment and rehabilitation for much of

the twentieth century, often leading to the injustices that Kant had warned of when extra-punitive purposes are attached to punishment (von Hirsch, 1976).

Nonetheless, after the post 1945 revelations of Nazi atrocities, the need to protect individual human rights in criminal and penal law was given a renewed emphasis. The UN General Assembly Universal Declaration of Human Rights 1948 stipulated that 'everyone has the right to liberty and security of the person. No-one shall be deprived of his liberty [except by] the lawful detention of a person after conviction by a competent court' (Article 5); and 'no-one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence under national or international law at the time when it was committed' (Article 7). In 1960, the European Court of Human Rights heard its first case, 'a leap forward in the history of human rights' (Howard & Morris, 1964, p. 153). The protection of individual rights was also reflected at a jurisdictional level. In the US, prosecution because of status rather than crime was declared unconstitutional by the Supreme Court.¹ In *O'Connor v Donaldson* (1975),² it was held that involuntary commitment of a non-dangerous individual capable of looking after themselves constituted 'a massive curtailment of liberty' and was unconstitutional.

Even those areas of penal development that had resisted or departed from the expectations of Reason gradually succumbed to its demands. It had always been assumed anyway that indeterminate prison sentences (at least in the English speaking countries) would be kept at the periphery of the penal system and rarely used. In England, Sir Evelyn Ruggles-Brise (1921, p. 58, our emphasis), Head of the English Prison Commission, was at pains to point out that such provisions 'do not touch that large army of habitual vagrants, drunkards, or offenders against bye-laws who figure so prominently in the prison population. [*These are weapons to be used only where there is a danger to the community from a professed doer of anti-social acts being at large, and reverting cynically on discharge from prison to a repetition of predatory action or violent conduct.*] Thereafter, the US sexual psychopath laws, providing as they did for a fixed term of imprisonment for the original crime after those so diagnosed were first 'cured' in a mental institution, were periodically struck down as unconstitutional or fell into disuse

¹ *Robinson v California* 370 US 660 (1962)

² 422 US 563

(Tappan, 1957). Other forms of indefinite, preventive sentencing experienced a similar fate (Bottoms, 1977). Their arbitrary and inconsistent use made their retention seem unjustifiable and their abolition seem inevitable (see the New Zealand Report of the Penal Policy Review Committee, 1981).

As for the death penalty, Reason and its attributes—science, rationality, humanitarianism—eventually triumphed over the emotive, punitive excess it had come to represent to policy makers in the post war period. It was eventually abolished in these Anglophone societies during the 1960s and 1970s. Government was prepared, at that time, to rid itself of punishments that were thought to have no rightful place in modern democratic society: '[the death penalty] is the one remaining relic in our penal world of the old system of complete repression which was tried against criminals and so badly failed ... these instruments have no proper place in the institutions of a free democracy ... repressive punishments belong to the systems of totalitarian states and not democracies. It was no accident that the chief exponents of violence and severity in the treatment of criminals in other times were the Nazi and Fascist states' (UK Hansard 449, 14 April 1948, col. 1014–1015). In imposing a (temporary) moratorium on the death penalty in the USA, the Supreme Court in *Furman v Georgia* (1972)³ affirmed that 'one role of the constitution is to help the nation become 'more civilized'. A society with the aspirations that ours so often asserts cannot consistently with its goals take the lie of any human being, no matter how reprehensible his past behaviour.'

Around 1980, Reason had reached its high-water mark in the development of punishment in modern society. Imprisonment had come to be regarded very much as a 'last resort penal option': too expensive, inhumane and inefficient (Home Office, 1989). For much of the twentieth century, barriers had been steadily erected in front of it to keep out a broadening range of offenders for whom it was thought that such a sentence was too harsh and would do more harm than good: first offenders, young offenders, child offenders, those who suffered from some sort of mental instability, drunks, vagrants and ultimately virtually all non-violent offenders. Not only this, but the 'back to justice' movement (von Hirsch, 1976), with its emphasis on consistent, limited and proportionate punishments reaffirmed the continuity of the penal expectations from the Age of

³ 408 US 238, 296–7

Reason. These were still the yardstick against which a society's alignment or otherwise with the presumptions and expectations of modernity could be judged.

In shaping these developments, an establishment elite, made up of senior civil servants, judges, university professors, and authoritative sections of the media such as the BBC and *The Times* newspaper as it then was, were greatly influential on government, and able to make pronouncements on the way forward for punishment with little fear or prospect of these being contested. The Home Office (1959, p. 13) White Paper *Penal Practice in a Changing Society*—the leading statement of the aims of British penal policy in the post-war period—thus determined that punishment should take the form of ‘more humane and constructive methods.’ Furthermore, the axis of penal power that the elite had formed with governments not only excluded any representatives of those who claimed to speak on behalf of the general public, but took the view that governments should move ahead of public opinion. Abolition of the death penalty had become an illustration of strong government, prepared to act as it saw fit and irrespective of the wishes of public opinion to the contrary. As one speaker in the British parliament explained: ‘I doubt very much whether at any time during the last one hundred years a plebiscite would have carried any of the great penal reforms that have been made. The appeal in the time of [Sir Samuel] Romilly was always the belief that public opinion would not stand it, but there are occasions when this House is right even if public opinion may not at that moment agree’ (UK Hansard 536, 10 February 1955, col. 2083). Seemingly closing any further discussion, *The Times* editorial (13 March 1975, p. 5, our italics), opined that ‘it has been said that parliament is a good deal ahead of public opinion ... this is to a large extent true ...it is certainly not our business to wait for public opinion on such an important issue.’

From this time, though, many of these trends and characteristics have been reversed: as if a resurgent anti-Reason now drives modern penal development. The growth of imprisonment, in some of the Anglophone countries especially, is perhaps the most obvious illustration of this. In the US, the rate of imprisonment has increased some 700 per cent from 1975 to 2012 (from 110 per 100,000 of population to 762).⁴ It has come close to doubling in the UK (from a rate of 80

⁴ The World Prison Brief has been used as the source for all prison statistics. Here, the US rate represents a decline from its high of 755 in 2008.

per 100,000 in 1990 to 147 in 2016); and has more than doubled in New Zealand (from 85 per 100,000 in 1985 to 208 in 2015). Furthermore, indeterminate prison sentences have been refurbished and reactivated. In New Zealand the number of prisoners serving the indefinite term of preventive detention has increased from 12 in 1985 to 284 in 2015. One in five English prisoners in 2012 were serving indefinite sentences, dramatically undermining the previous emphasis on proportionality and consistency.

There have also been innovative penal measures that strike at the very core of what had become inviolable values of punishment in modern society. Three strikes laws, sometimes two strikes, punish prior record in addition to the crime committed. Retrospective legislation—punishing behaviour that was not criminal at its commission—is justified on the grounds that the need for public protection supersedes individual rights. The principle of no double punishments is contravened by ‘civil detention’ provisions (that is, indefinite imprisonment) for some sex offenders at the end of a finite prison term, as is the principle that only the guilty can be punished: they are being detained because not because they have committed more crimes but because they are thought to be at risk of committing crime in the future. These moves to controlling risk at one end of the penal system have been matched at the other by controls on movement in public space of a variety of those who live their lives on the street (gang members, vagrants, beggars etc) in the form of supervision and surveillance to prevent future crime—but before they have actually committed one.

In addition, the language of punishment is now much more redolent of the voice of Anti-reason rather than Reason. ‘Three strikes’, ‘life means life’, ‘no parole’ and so on put into legislation raw, vengeful common-sense rather than humane objectivity and rationality. At the same time, the authority of the central state has weakened (Garland, 1996). Now, rather than being prepared to move ahead of public opinion, it is ready to implement some of its wildest demands. Even so, this has not been sufficient to hold back some sections of the public from vigilante activities that challenge the state’s previous monopolistic power to punish (Pratt, 2000).

EXPLAINING THE RISE OF PENAL POPULISM

One explanation of these transformations attributes them to the rise of penal populism. This needs to be distinguished, first, from ‘authoritarian populism’ (Hall, 1979). The latter was seen as involving the imposition of ‘a new regime of social discipline and leadership *from above* in a society increasingly experienced as rudderless and out of control’ (Hall, 1988, p. 84, our italics). But such an account does not involve any recognition of the way in which populist social movements have broken up the existing axis of penal power and formed a new one with government that, having expelled establishment elites from influence, now puts its own illiberal stamp on punishment. Second, it also needs to be distinguished from ‘populist punitiveness’ (Bottoms, 1995). This involves politicians ‘tapping into’ the public’s seemingly punitive stance on crime for their own electoral advantage, by manipulating this with extravagant promises about what more punishment will achieve. Here again, though, the dominant political class are still seen as being in control of events, rather than responding to the demands of outsider law and order activists and so on.

In contrast, penal populism specifically addresses the role and influence of these hitherto outsider individuals, groups and organizations on contemporary penal development. Developing the work of political scientists such as Shils (1956) and Canovan (1981) on populism, it is as if crime and punishment issues act as magnets that draw together those who see themselves as disenfranchised by governments thought to have allowed the unworthy and undeserving to prosper at their expense. In the criminal justice field, it was as if the establishment had been pulling the strings of government, prescribing generous treatment and lenient sentences for law-breakers while ignoring the well-being of crime victims and law-abiding citizens. From the 1980s, these concerns turned into howls of rage from newly emerging social movements that now claimed the right to speak on behalf of those whom government had forgotten. Their primary demands included terminating the baneful influences of the establishment and replacing them with their own representatives. In the new axis of penal power that began to be forged, crime control policy should take the form of protecting the public from crime risks and punishing those who pose them, rather than safeguarding the individual rights of offenders and potential offenders.

Initially taken to be an almost exclusive characteristic of the main Anglophone societies, penal populism emerged out of the tensions and dynamics created by the neo-liberal restructuring that took place in these societies from the early 1980s (Pratt, 2007). It was seen as having five underlying causes:

(I) THE DECLINE OF DEFERENCE.

This helps to explain disenchantment with establishment power structures. It means that the values and opinions of elites which had previously been accepted without question are now not only respected but can provoke outrage and derision. Nevitte (1996) argued that the decline of deference is a natural consequence of post-1945 social reforms that raised the living standards of the whole population. Before the 1980s, it was assumed that establishment figures—in the universities, the civil service and so on—formed a natural class of government on the basis of their lineage, education and wealth and the positions of power that these characteristics then guaranteed for them. Thereafter, however, those in government or government bureaucracies would no longer be viewed as the social superiors as the rest of society, having the exclusive right to pronounce on issues of the day, and would accordingly be challenged by those outside these Establishment circles.

However, the extent to which this supposed equalization has occurred in some societies (Britain, for example) would seem debatable. What seems more pertinent to the decline of deference is the way in which the criminal justice establishment failed to address issues of rising crime from the 1950s and in so doing seemed remote and detached from the concerns of ‘ordinary people’ (Margaret Thatcher’s successful use of ‘law and order’ in the 1979 British election was one of the first illustrations of the political potency of this issue). The subsequent decline in crime from the early 1990s across most of Western society (for example, Zimring, 2012; Farrell et al, 2014) could not displace the way in which rising crime had by then become a taken for granted ‘social fact’—to which the establishment had no answer. Attempts by its members to explain that it was in decline rather than rising simply became proof of their own irrelevance and duplicity. By the same token, the developing area of risk control through penal measures has come to symbolize the way in which governments were prepared to jettison previous ties to the Establishment, with its now derided concerns about

ensuring individual rights rather than protecting community rights. Introducing the British anti-social behaviour legislation, the Home Secretary stated that this ‘represent[ed] a triumph of community politics over detached metropolitan elites’ (UK Hansard 310, 8 April 1998, col 370).

(II) THE DECLINE OF TRUST IN POLITICIANS AND EXISTING DEMOCRATIC PROCESSES

Electorates grow increasingly cynical of politicians’ promises and guarantees of better futures when these regularly fail to materialize (especially when this is compounded by evidence of their own scandalous conduct, as with the revelations of extensive fraudulent expenses claims by British MP’s in 2009). Indeed, rather than bringing better futures, government policies may bring disaster to those citizens who loyally adhere to them. In the aftermath of economic restructuring, worthy citizens who had followed government advice and invested, often for the first time, on the stockmarket (making fortunes in this way was advertised as no longer being the prerogative of the already rich), were likely to have been the ones hurt most when the first of the great post-restructuring crashes occurred in October 1987.

Using the experience of New Zealand as an illustration, this had been one of the countries at the forefront of the restructuring. The crash then contributed to a dramatic decline of trust in both its Left and Right mainstream political parties that had been committed to it—support falling to nine and 12 per cent of the electorate respectively in opinion polling in the early 1990s (see Pratt & Clark, 2005). This decline of trust simultaneously led to a surge of support for the right wing and populist New Zealand First party. It promises to place ‘control of New Zealand’s resources in the hands of New Zealanders, by restoring faith in the democratic process’, alongside ‘common-sense decision-making in the best interests of all’ (New Zealand First, 2014). The decline also brought a change to the electoral system that has virtually guaranteed this party permanent representation in parliament. Following a referendum, the ‘first past the post’ system was changed to proportional representation in 1996. New Zealand First will almost always be able to attract a disaffected core of the electorate sufficient to take it over the five per cent threshold it now needs to gain parliamentary seats. On two occasions since, it has become ‘kingmaker’ in coalition governments.

Much of this party's initial success came through speaking to public anxieties about crime and promising magical solutions to the problem (more police, tougher sentencing, Pratt & Clark, 2005). The major parties have been prepared to accede to these demands to win their support in parliament (Lacey, 2009). Furthermore, the popular appeal of 'law and order' that it had demonstrated encouraged the mainstream parties (as in Britain and the USA, see Jones & Newburn, 2006) to compete with each other on these terms, thereby building penal populism into government policy.

(III) THE RISE OF GLOBAL INSECURITIES AND ANXIETIES

From the 1980s, the modern world has become a much riskier, threatening place (Beck, 1992), in many ways a consequence of the same restructuring. If this has brought new possibilities of pleasure and fulfilment in everyday life, these are also beset with new risks—terrorism, new kinds of cancers, credit card fraud and so on. This has occurred in conjunction with fragmentation or disappearance of many of the old and familiar symbols of security and stability. The permanence of employment and all that comes with this has disappeared for many (Standing, 2014). Family life has become much more tangential, with increased likelihood of divorce amidst the growth of impermanent de facto relationships.⁵

⁵ Marriage rates (i.e. number of marriages occurring among the population of a given geographical area during a given year, per 1,000 mid year total population) are as follows: Australia, 1980: 7.4, 2013, 5.1; Canada, 1981, 7.7; 2008, 4.4; New Zealand, 1980, 7.3; 2014, 4.4; UK, 1980, 7.4, 2012, 4.4; USA, 1985, 10.1; 2012, 6.8. Ratio of marriages to divorce over the same period is as follows: Australia, 1980, 2.75:1; 2013, 2.3:1; Canada, 1980, 3:1; 2008, 2:1; New Zealand, 1980, 3:1; 2014, 2.5:1; UK, 1980, 2.7:1; 2012, 2:3:1; USA, 1980, 2:1; 2012, 2.2:1. Couples in de facto relationships in Australia increased from 5% in 1982 to 15% in 2006; in Canada, 6% in 1981 to 16.7% in 2011; in the UK, from 8.9% in 1996 to 16.4% in 2014. One parent families increased in Australia from 8.6% in 1981 to 15% in 2011; in Canada, from 11.3% in 1981 to 16.3% in 2011; in new Zealand from 12% in 1981 to 17.8% in 2013 in the UK, 13.9% in 1981 to 25% in 2014; in the USA, from 19.5% in 1980 to 29.5% in 2008. Meanwhile average household size declined across all these societies: in Australia, from 2.8 in 1986 to 2.6 in 2006; in Canada, from 3.3 in 1981 to 2.9 in 2011; in New Zealand from 3.0 in 1981 to 2.7 in 2013; in the UK, from 2.7 in 1981 to 2.4 in 2012; in the USA, from 19.5 in 1980 to 29.5 in 2008.

Hence, again, the utility of crime and punishment in remedying these deficiencies in social capital. During the 1990s and early part of the twenty first century, it seemed that crime was the most obvious and immediate source of risk and danger, the most obvious and immediate symbol of the inability of governments and their experts to do anything about making everyday life more secure. As Tyler and Boeckmann (1997) demonstrate, the more social cohesion seems to be unravelling, the more likely it is that there will then be support for severe punishments—not simply as a response to crime but as a way of providing consensus and solidarity and the restoration of authority which seems to be missing elsewhere in the social fabric. The intensity and ferocity of the new language of punishment ('three strikes' etc) reflects the enhanced and extended role punishment has had to play in these societies in this regard.

(IV) THE INFLUENCE OF THE MASS MEDIA

Life in modern society has come to be characterized by 'the sequestration of experience' (Giddens, 1991, p. 244): 'the separation of day-to-day life from contact with those experiences which raise potentially disturbing existential questions—particularly experiences to do with sickness, madness, criminality, sexuality and death.' As most people in modern society became uncomfortable in dealing with these aspects of everyday life, so these matters were steadily hidden behind bureaucratic screens, with the mass media vicariously informing their publics about them. Or rather, for much of the twentieth century, what information they were provided with was shaped by authoritative sections of the media, allowing the establishment to remain largely in control of public understandings of them.

However, from the 1980s, structural changes in the media meant that this was no longer possible. Changes in media technology, the advent of satellite television, and the deregulation of broadcasting had brought about a much more diverse and pluralistic set of understandings about the world—at a time when the decline of organic community life has meant that individuals have become much more reliant on the news media rather than friends, family or work colleagues to inform them about the world. These structural changes in the media then meant that the onset of the fall in crime had little public impact. It was not really newsworthy. Instead, crime continued to be defined as the most obvious and immediate source of risk and danger. Deregulation of state broadcasting amidst the

advent of new media technology meant that news reporting had become more simplified, more competitive, more readily available and more sensationalized: more than ever before, a sensational story about crime—its menace not its decline—would beat off competitors, attract the public and thereby attract more advertising revenue (Jewkes, 2004). Amidst this restructuring, the criminal justice establishment found itself unable to control the parameters of public debate and knowledge about such matters.

(V) THE SYMBOLIC IMPORTANCE OF CRIME VICTIMS

The importance of crime news in the new framework of knowledge also gave much greater emphasis to victims' accounts of their experiences, rather than the detached, objective analysis of experts. In this respect, crime victims were given a new kind of authenticity and authority. Their personal experiences outweighed the statistical realities of crime. In most cases, these experiences were presented as something that could easily happen to anyone: going to school, journeying home from work and so on became the starting point for a catalogue of horrors that were then inflicted on these unsuspecting victims. When such catastrophes could befall respectable, ordinary citizens in the banality of their everyday life, it was as if what had happened to them became a universal experience and a universal danger.

Hearing, reading, watching their traumas led to demands for more emotive and expressive punishments that sufficiently reflected public anger and revulsion at such crimes; and demands, as well, for more opportunities for victims to express their own anger at their suffering, as opposed to the carefully measured tones of court room professionals. In a number of jurisdictions, such demands have necessitated a spatial and emotional reorganization of criminal justice proceedings, with victims at their centre, rather than their offenders, going through the detail of their victim impact statements. But when judges seem more swayed by reason rather than the pain victims when passing sentence (in reality their hands are likely to be tied by legal constraints anyway on what they can do), this further divides the criminal justice establishment from victims and potential victims and their expectations of justice. It becomes more evidence of how out of touch such elites are from everyday life.

LEGITIMACY DEFICITS AND THE RISE OF POPULIST POLITICS

While these were the forces that combined to drive penal populism, other modern societies were seen as having built-in defences against such intrusions: a much greater deference to the criminal justice establishment and trust in government in Finland, for example, had prevented its emergence in that country (Pratt, 2007). But since the publication of Pratt's *Penal Populism*, it is clear that populism no longer confines its influence to the penal sector of the Anglophone countries. Instead, it cuts across much of political life in modern society as a whole, transforming wide-ranging areas of governance. Historically, populist movements have been found on both the left and right of the political spectrum (Betz, 1994). In Greece, for example, it brought the left-wing Syriza party to power, in opposition to EU and IMF demands for economic restructuring and massive reductions in government expenditure. It is usually the case, though, that when populism surfaces in a particular society, it moves the political agenda well to the right (see Haney, 2016 on the Czech Republic, Hungary and Poland,). Even so, there are important nuances and differences within right wing populism. In some cases it professes to be anti-big state (as in the UK); in others (as in Sweden and Finland), it wants to preserve extensive state services—but only for its own authentic nationals—new arrivals will not be welcome. In addition, contemporary populism has brought into being a new era of anti-democratic 'strong man' politics (as in the Philippines, Turkey and Russia).

What is it, though, that has brought about the rise of this populist politics? Again, the specific mix of its causes varies. In China, for example, penal populism became a testament to the Party-state's determination to protect its citizens from evil crimes and uncertain risks associated with the profound transformation of the Chinese society to a market economy from the late 1970s (Miao, 2013). Nonetheless, what remains at the core of populism is the sense of disenchantment and disillusionment amongst large sections of society with the way in which political power has been exercised by governments, seemingly in collusion with establishment elites—favouring the unworthy and the undeserving at their expense. Initially, the penal system had been a useful receptacle for this 'legitimacy deficit'—the tension and anxiety that is generated amongst those who feel powerless, ignored, or left behind by the way in which the dominant class exercises power (Beetham, 1991). In a bid to compensate and restore their legitimacy, governments were happy to direct that antagonism towards criminals and

prisoners—unpopular outsiders who played the role of useful scapegoats. Thereafter, though, the much greater potency of political populism has been the product of the way in which two of the elements necessary for penal populism have become much more deeply entrenched in the fabric of modern society. These not only give a distinctive texture to the already existing cauldron of mistrust and anger on which populism feeds but ensure that it spills out of the penal sector altogether.

First, *economic insecurity and uncertainty*. The global fiscal crisis of 2008 has deepened already existing inequalities in modern society brought about by the globalization of trade and capital from the 1980s—between the winners in the casino economies that were created and its losers (Reiner, 2001). At one level, it had been thought that the 2008 crisis would impose greater financial rectitude on governments, thereby blocking penal populism and its financial profligacy (Pratt, 2008). If, to a degree, this has occurred,⁶ the crisis itself had a much deeper impact on everyday life than this. By and large, winners continued to win. Indeed, the winnings of some of them greatly increased because they bought up cheap property or shares that came on the market in the subsequent recession. The number of losers, however, became greatly swollen due to attendant redundancies and intermittent unemployment, permanent underemployment, or reductions in employment conditions for many others, alongside cuts and restrictions on welfare expenditure.

At the same time, opportunities for employment in the public sector—a previous safe haven, offering longevity and security, generous pensions and regular wage increments—have significantly diminished as a result of the new limits imposed on government spending post-2008. The full extent of the changing nature of the labour market, from the beginning of restructuring in the 1980s to post-2008 economic stringency is reflected in the decline of public sector employment: from 27.6 per cent of the Australian workforce in 1989 to 16.5 in 2014; from 25.9 per cent in New Zealand in 1981, to 17.1 in 2013; from 27.4 per cent in the UK in 1980 to 17.2 in 2015. For most, employment in the much more precarious and quixotic private sector awaits—if anything awaits them. The general expectations of inexorable progress associated with modernity, of betterment, of always improving living standards, have also evaporated. The Governor

⁶ See note 4 regarding the decline in the US imprisonment rate. See also Goode (2013).

of the Bank of England has thus warned that 'Britain is experiencing its first «lost decade» of economic growth for 150 years [and that] real incomes had not risen in the past ten years' (quoted in *Daily Telegraph*, 6 December 2016).

This 'precariousness' (Standing, 2014) has deepened the already existing distrust of establishment elites and supra-national governmental organizations, such as the IMF, EU, World Bank and so on (for Donald Trump, the UN has become nothing more than 'a good time club').⁷ These are seen as either powerless to prevent the 2008 crash, or helplessly caught up in it, or responsible for it: but still flourishing themselves, all the same. The expertise they profess and its associations with reason, rationality and science is not even considered worthless any more. It has a negative value instead. It damns and condemns them in the eyes of the public at large. 'People in this country have had enough of experts', was the claim made by leading campaigner for Britain to leave the EU in 2016, Michael Gove.⁸

In addition, the crash further burnt away traditional political loyalties. Even democracy is no longer seen as a precious gift of modernity, with built-in guarantees of good government. Instead, it is pictured as a quagmire by populists that drags many deserving but not prospering citizens down to its depths, while members of the Establishment can always find escape routes. Attempts to bridge the legitimacy deficit by extending democratic processes only bring disinterest and disdain. In Britain, elections to the European parliament have turnouts of less than 50 per cent, while the first elections there in 2012 for local police commissioners saw less than a ten per cent turn out in some constituencies. It seems that it is only in plebiscites, referenda and, in the US, citizens' propositions that are understood and trusted as authentic expressions of public will. The 2016 British EU referendum had voter turnout of 72 per cent, compared to 66 per cent in the general election of 2015, and only 59 per cent in that of 2001. Alternatively, electorates may be prepared to give their support to aspiring politicians who claim to speak on behalf of 'the people' rather than the establishment, who present themselves as independent minded 'strong men' rather than party loyalists, and who, as with Trump, promise to 'drain the swamp' of central government and career politicians altogether rather than add more layers to the existing democratic process.

⁷ Quoted in *Daily Mail*, 27 December 2016

⁸ Quoted in *The Financial Times*, 3 June 2016

Second, *the emergence of a new kind of victimhood*. This is something more than being a crime victim, or fear of becoming one, which governments had tried to offset by promising tougher punishments on the perpetrators. While cries for law and order have not been prominent in recent elections in those societies—the fall in crime no doubt reduces its purchase somewhat, fears of specific types of crime or criminals—fear of paedophiles and sexual predators, for example, in those Anglophone countries especially—seem stronger than ever. Such fears still inform the conduct of much of everyday life and have led to the introduction of further preventive measures that continue to erode fundamental features of criminal justice in modern society (Pratt, 2016). Equally though, such fears have become conflated with fears of difference, fears of otherness—qualities variously demonstrated by strangers, foreigners, immigrants, asylum seekers, refugees ('Disabled limping migrant who uses a crutch while begging in London is exposed as a FRAUD when he is seen strolling off to buy a takeaway', *The Sun*, 16 September 2016). Fears and suspicions such as these are periodically fuelled by terrorist outrages that give further justification to such concerns and the horrendous dangers that these outsiders might be capable of, while reminding potential victims of their helplessness on such occasions. Fears such as these continue to demand more punishment, but they also demand that more controls be put in place to protect the public: sexual predators—keep them in prison, even after their sentences finish; paedophiles—hunt them down and drive them from local communities altogether; local troublemakers—issue banning, restriction and prohibition orders; asylum seekers, refugees, unwanted foreigners and all the rest of these strangers—build barriers, walls, fortifications to keep them out; protect the borders so they cannot come in; speed up deportation processes once they are caught.

These are some of the responses to this new kind of victimhood whereby it is not only the well-being and security of individuals that is endangered but also that of the nation state itself as mass immigration is seen as corroding its values, security and identity. In Britain, these concerns have been prompted primarily by Eastern European migrants, now allowed to move to Britain without restriction since their countries joined the EU in 2004. In the East European countries themselves, it is fear of asylum seekers and refugees from the Middle East. In the US, it is fear of Mexican 'rapists and murderers' crossing the border in the south and Muslim (which for many Americans is synonymous with terrorism) immigration in general. And so it would be possible to continue collating this inventory of fear and suspicion, moving from one modern society to another.

As well as demanding protective and innovative para-penal measures, this new kind of victimization continues to erode trust in supranational organizations and establishment elites. Having positioned themselves, once again, above the everyday chaos and insecurity that they had helped to create, these are seen as weakening the nation state by imposing foreign, alien, unwanted values and practices on it. Haney (2016) writes of East European fears of losing control over national interests as a consequence of joining the EU. Similarly in the UK, the European Court of Human Rights has become one of the most prominent signifiers of the imposition of unwanted European difference on British values and understandings. It seemingly has the power to insist that Britain should be 'Europeanized' as it sees fit, with its intervention in criminal justice matters symbolizing such dangerous intrusion. Notably, the Court's declaration that the British 'blanket ban' on all convicted prisoners' voting rights, regardless of the gravity and circumstances of their offenses, violates Article 3 of the European Convention on Human Rights (*Hirst v UK* [no 2] 2005). Similarly with regard to 'whole life sentences' (*Vinter and Others v UK* [2013] ECHR), a decision that reflected, it was claimed, a European 'rights madness', as opposed to British common-sense (Hastings, 2013).

The consequences of deregulation and technological advancement enhance the power of the media to highlight such unwanted interventions and the social distance that exists between these ineffectual, dilettante elites and 'the people', as if the will of such a body is now the only authentic expression of authority. The response of the British *Daily Mail* (4 November, 2016) to Court of Appeal judges who ruled that the vote to leave the EU following the 2016 had to be ratified by parliament, was to label them 'Enemies of the People' and 'out of touch judges' who 'had declared war on democracy.' As this example shows, news making and reporting has broken out of the paradigm of reason, rationality and truth in which it had been expected to operate in modern, democratic societies, however elasticated this concept might previously have been. It has no limits, no ethical standards, no set direction to constrain it or that it has to follow. Demands that truth be told, as some journalists tried to insist during the 2016 US election, were dismissed with rejoinders by the Trump campaign that this was simply evidence of 'bias' against them in the mainstream media. Indeed, for Trump him-

self, the journalists at CNN and the New York Times, who stood by truth, were ‘the lowest form of humanity.’⁹

But when truth is abandoned, then everything can be a lie: there is no means of distinguishing between fact and fiction, nor any point in trying to do so. The purveyors of ‘post-truth news’ simply call on their critics to prove that what they are saying is not true. Until then, lies and conspiracies ‘remain a story.’ Lie, lie, lie. Lie again and again. ‘Lord, lord, how this world is given to lying.’¹⁰ Throw away truth, and then evidence and facts only become another set of lies. Rather than using truth to win votes, conjure up demons and devils—these can all be fabrications themselves—that need to be confronted by a strong man: then demand that voters out their trust in that man to rid the world of such pestilence, rather than career politicians and effete bureaucrats—what do they know of the insecurities that lie behind such dark fantasies? As it is, the rise of Facebook (2004) and Twitter (2006) since the 2008 crash has meant that individuals can not only create their own news and report it as they see fit but publish it before vast audiences. Again, this new kind of news can be entirely fabricated (‘alt news’) and usually speaks to some vast web of conspiracy that is supposed to exist, working to entrap the unsuspecting and the vulnerable in its lair. As one of the most prominent anti-EU campaigners in Britain stated, ‘the more outrageous we are, the more attention we’ll get. The more attention we get, the more outrageous we’ll be’ (quoted by Rawnsley, 2016a).

Through strategies such as these, populist politicians have come to prominence. While they may well have tougher punishments on their agendas, this is likely to be only one component of a programme that, they claim, will magically transform an entire society: rid it of corruption and inefficiency, bring a brighter future through a reassertion of authority and nationhood. This was seen most vividly in the campaign themes of the two most spectacular populist electoral successes in 2016. First, the British EU referendum. ‘Leave’ campaigners used the logo ‘Take Back Control’, as if by voting to leave, it would be possible to retrieve all that had been lost or stolen—presumably as a result of EU membership; it would be possible to restore national identity and rid the country of corrupting and ‘un-British’ foreign influence; and it would be a gesture of defiance

⁹ Quoted by *New York Times*, 12 August 2016

¹⁰ William Shakespeare, *Henry IV, Part I, Act 5, sc 4*, p. 7

against the EU—favouring establishment. A vision of a completely mythical and irretrievable past of security and cohesion was conjured, when British people were masters of their own destiny. When was this supposed to have been—who knows? Just before Britain joined the EU in 1973? But that was a period of massive industrial conflict, rising inflation and growing racial tensions (Hall et al, 1978)—this was a time when government had *lost* control—it cannot have been then. Maybe when there was an Empire, or maybe when there was a powerful White Commonwealth, or maybe when Britain (and the colonies) fought alone against Nazi Germany—rather than subject to EU rules, laws and regulations. The route to this Nirvana involved walking away from Europe, although, in reality, not in to a glorious past but a troubled and darkly uncertain future.

Similarly, ‘Make America Great Again’, Trump’s logo in the US election. Here too, the theme conveys the sense of loss and betrayal—variously blamed on corruption in central government, international financiers, Muslims, Mexicans, globalization and the infamy of wicked individuals (such as ‘Crooked Hillary Clinton’). Hence the need to ‘drain the swamp’, ‘build a wall’, ‘lock up’ Clinton and so on. This kind of purification process was necessary, it seemed, if the glorious past was to be recreated—although exactly when this was remained unspecified. Nonetheless, a society could be rebuilt around dominant white men, where jobs that used to exist before globalization made them redundant would somehow reappear, and where dangerous foreigners would be kept out. In such ways, the implied promise of both ‘Take Back Control’ and ‘Make America Great Again’ was that not only would the nation be secure against insidious threats to its well-being that the establishment had allowed to fester, individuals would also be given back what they think has been taken from them: familiarity, certainty, security.

THE END

These two electoral successes came as a profound, distressing and disturbing shock to many. They had been so unexpected—as if at the last, Reason would prove resolute in the face of what ever the anti-reason lies, distortions and made up news were thrown at it. President Obama had attempted to counter such challenges with an ‘ode to reason, rationality, humility and delayed gratification’ (quoted by Packer, 2016, p. 84), an argument for the renewal and continuity of ‘American progress.’ In the aftermath of defeat, though, and amidst a great surge

of hate crime, racial abuse and racial intolerance that had been unleashed in its wake, the liberal intelligentsia suddenly found themselves staring at a cataclysm. Andrew Rawnsley (2016b), for example, on the vote for Britain to leave the EU, wrote that it represented ‘a journey into the unknown for a country never before so divided ... between doing-well Britain and left-behind Britain, between the Britain that is essentially comfortable with globalization and diversity and the Britain that feels its anxieties and anger about identity loss have not been listened to.’ On the election of Trump, Richard Wolffe (2016) wrote that ‘we may as well call this what it is: a revolution ... nothing else comes close to capturing the political revolt—and the chaos that surely follows ... an era that stretches back to Franklin D. Roosevelt just came to an abrupt and ugly end.’

In fact, the profundity of these events has an even deeper significance. Each signalled that the long journey that modernity itself had taken from the time of the Enlightenment had come to a shattering end. The defeat of Reason—of rationality, science, truth, objectivity, consistency—and its ability to structure and inform the parameters of governance in the modern world—means that only the unknown awaits. This will not be the end of uncertainty and insecurity promised by populists, but only the start of new uncertainties and insecurities, alongside the exacerbation of those already in existence. That said, the two events themselves do not constitute any *sudden* end to Reason; rather, they should be seen as marking the final moments of a process that had made such an end inevitable, a process that had systematically undermined all that had been intended to provide the certainty and stability, the cohesion and solidarity that would otherwise have been strong enough to resist the shamans of populism.

When did this process begin? When was it that all that we had come to assume was permanent would, in reality, have no permanence at all, have no more substance than a sandcastle built to stem an incoming tide? In *The Four Quartets*, T.S. Eliot (1943, p. 23) wrote ‘In my beginning is my end. In succession, houses rise and fall, crumble, are extended, are removed, destroyed, restored.’ In the beginning is the end. Where do we look for that beginning that led to the end of Reason? The starting point is likely to have been Reason’s post-1945 reassertion, its response to the aberrations from its path in the ravages of the depression years of the 1920s and 1930s, followed by the rise of anti-democratic strong men in Europe who brought catastrophe—carnage, destruction, misery and genocide. Hence the phrase that dominated political discourse in the democracies after

1945: ‘never again.’ Never again. It became the task of post war governments to ensure that there could be no return to that previous dark time of anti-reason—never again.

How was Reason to be secured against any subsequent aberrations? Roosevelt’s New Deal had promised greater government management of the economy, poor relief and increased public expenditure. New Zealanders had been promised ‘cradle to the grave’ security in their Social Security Act 1938. The United Kingdom’s Beveridge Report (1942, p. 170) promised to control risk and insecurity by eradicating ‘five giant evils: Want, Disease, Ignorance, Squalor, Idleness.’ Similar intents were expressed in the Canadian Marsh Report (1943) and the Australian White Paper on Full Employment (1945). Rigorous planning by the state was the way to make certain these promises of a good future, one that gave hope to all. In 1943 Beveridge (quoted by Kynaston, 2007, p. 31) had anticipated that when peace came, ‘the very first thing to win is the Battle of Planning. We shall need to have planning on a national scale, boldly overstepping the traditional boundaries of urban council, rural council, county council.’ Similarly, the Marsh Report (1943, p. 7) explained that ‘the pre-war background has not been forgotten by many Canadians ... and it must not be forgotten in the post-war period, in planning in advance what measures should be taken ... to give reality to the aspirations and hopes which the peoples of the world are more and more clearly voicing.’

Hence the physical, material and ideological shape of post-war society. The modern city would become a haven where all had a rightful place, would become a testament to the virtues of planning, of rationality, a testament to the virtues of Reason itself, its celebration of public space a necessary feature of harmonious community life. Ebenezer Howard’s (1946, p. 44) vision of ‘the social city’, for example, was based around wide, tree-shrouded avenues, homes, public gardens and a central park: ‘large public buildings would be at [its] centre: town hall, library, museum, concert and lecture hall, the hospital. Here, the highest values of the community are brought together—culture, philanthropy, health and united cooperation.’ Family life, too, had an importance beyond that of the individuals concerned. Now, it would be ordered and structured by government and its new organizations of assistance to ensure that the well-being of individuals contributed to the well-being of society as whole: ‘parenthood itself must become a central interest and duty; and the family and the primary group of workfellows

and neighbours must become a vital core in every wider association' (Mumford, 1945, p. 214). In 1950, there were around 100 marriage guidance clinics in existence in Britain to provide the guidance and direction necessary for those struggling to meet these expectations (Clark, 1991).

What mattered most in the provision of this extensive apparatus of support and instruction, wrote leading British sociologist of the period T.H. Marshall (1950, p. 56), 'is that there is a general enrichment of the concrete substance of civilized life, a general reduction of risk and insecurity, an equalization between the more or less unfortunate at all levels.' Indeed, the vastly expanded public sector workforce that would be necessary to achieve all such objectives in itself went some way to achieving this by providing guarantees of employment security and status (in the UK, for example, civil servants increased from 340,000 to 720,000 between 1931 and 1955, Marwick, 1971, p. 137). These guarantees were not pre-saged around an especially ambitious life, to be sure, not a life that would be lived in the fast lane, frenetically grabbing at pleasures and indulgencies as they came along; but a good life all the same, a life that now had comfort rather than hardship as an expectation, a life to be cherished rather than abandoned to whatever fate came its way. And the future seemed assured at this time. In Britain, a *Daily Telegraph* (27 December, 1961) opinion poll of 16-18 year olds found that only nine per cent disagreed with the opinion that 'the world would be a better place to live in ten years time.' In a world of stability and security, what is particularly striking in the other responses of those polled is the regularity of their working habits. After three years, more than half were still in the same employment as when they started. Furthermore, one in three were regular church attendees. Only one in ten was not looking forward to getting married; 85 per cent disagreed with the assertion that it did not much matter whether or not the marriage worked out well.

Yet the very successes of this post-war solidarity project (Garland, 1996) began to eat away at its base. Certainty and stability in personal life and relationships were the first to crumble, under demands for much greater expression of personal choice regarding sexual preferences and identities. It resulted in what had previously been the taken for granted presence of family life and all the networks woven around it becoming much more tangential, as noted. What possible role could all the marriage guidance clinics now have in the light of the subsequent reality of family life? As Ulrich Beck (quoted in Bauman, 2000, p. 6) has written,

‘Ask yourself what actually is a family nowadays? What does it mean? Of course, there are children, my children, our children. But even parenthood, the core of family life, is beginning to disintegrate under conditions of divorce ... [G]randmothers and grandfathers get included and excluded without any means of participating in the decisions of their sons and daughters.’ Many others fall through what have become these flimsy networks altogether and find themselves living alone, one of the most significant features of current demography in modern society.¹¹ Whatever personal histories lie behind this—choice or misfortune, accident or cruel fate—the growing presence of this cohort more than any other represents the atomization of everyday life in modern society and the importance of structures of support and guidance beyond the family to provide interdependencies and bonds to the rest of society. In an era when we all now have to ‘operate at the outer edge of the ordered world, on the barbaric final frontier of modern technology’ (Giddens, 1999, p. 2), when we are all involved with complex social economic and technological systems we do not understand, so many have been left on their own to try and digest and resolve the existential dilemmas and conflicts that these produce on their own.

This is because, in addition to the changing nature of family life, extra-familial structures also began to collapse from the 1980s, as Robert Putnam (2000) observed in *Bowling Alone*. The post-war solidarity project, it was now claimed, had been both inefficient and sapped the energy of individuals to make their own way in the world, make their own fortunes and spend them as they wished, rather than having the state tell them what they might do—although, of course, they would also have to manage their own risks—for good or bad. Thereafter, amidst declines in church attendance, volunteering, trade union membership and the performance of civic obligations, deregulation and globalization not only made employment prospects less predictable and permanent and more uncertain and contingent, but the attendant redevelopment of communities and movement of labour also began to dissolve local cohesion, ties and responsibilities: ‘enterprise culture proved to be a solvent of bonds of trust and community and a source of insecurity to many. The mobility demanded by a dynamic market economy is not easily reconciled with a settled common life. The end result was the weakening

¹¹ The percentage of people living alone has increased from 18.8% of the Australian population in 1986 to 23% in 2013; from 11.4% in Canada in 1981 to 27.6% in 2011; from 16% in New Zealand in 1980 to 23.5% in 2013; from 22% in the UK in 1981 to 28% in 2014; from 22.7% in the US in 1980 to 27.4% in 2012.

or dissolution of the ties of the community and the generation of a society of strangers' (Gray, 1993, p. 54).

Most public and political attention though—in the main English speaking countries especially that were in the forefront of these changes—was given to celebrating the fame and fortune that greeted the winners that this economic restructuring had made possible. The losers—all those left behind or those who could not keep up with the changes—found themselves largely written out of the script. These growing divisions, the growing tension between those perpetually on the move,¹² heading up an ever extending escalator that exponentially provided more wealth and success at each new floor and those left out, perpetually trapped in modern society's bargain basement, feeling aggrieved at governments who seemed to have so little interest in helping them to get to even the next level, informed the development of penal populism.

By introducing innovative sanctions and controls, as well as more extensive and intensive punishments on those who seemed to be the most obvious and direct threat to individual well-being, here was a simple, common-sensical, if expensive (necessitating reductions in expenditure for other social and welfare measures) way for governments to show that they had not forgotten the worthy but left-out constituency. Indeed, they were now prepared to speak its language of punishment, rather than that of their erstwhile experts, in the new axis of penal power that began to put these measures into effect. Here was the way, temporarily at least, to unify the population, to heal divisions and to restore social cohesion. If this was at the expense of many of the principles on which criminal justice in modern society had been built, then this could easily be explained away ('rebalancing the criminal justice system', the new controls were 'only for the worst of the worst', only out of touch 'liberal elites' will care, see Pratt, 2016).

As we have seen, though, penal populism proved to be only a staging post towards the much more extensive populist march through modern society. The increased potency of the threats to individual and national well-being meant that populism was able to burst out of the constraints of the penal zone and pervade the whole social body. This does not mean that it has now finished with its trans-

¹² Cf Bauman (2001, p. 62) 'individuals who are untied to place, who can travel light and move fast, win all the competitions that matter and count.'

formation of the possibilities of punishment. As anxiety, uncertainty and insecurity increase, as criminality is conflated with otherness, so criminal law and punishment themselves become more diverse and amorphous, increasingly seeking to control risk rather than merely punishing crime. In so doing, the boundaries that had previously separated punishment in modern society from punishment in non-democratic, totalitarian societies are further eroded.

This, though, is a matter of little consequence for populism and its forces. What drives it is not any legacy of Reason and the Enlightenment but anger and resentment and the construction of a magical politics around these emotive forces that promises to eliminate at a stroke all the demons and devils it identifies. In 'taking back control', in 'making a nation great again', who then needs Obama's commitment to 'tolerance, compromise and our common humanity ... the values of liberal democracy' (Packer, 2016) to accomplish this? Who needs evidence, rationality, facts and science and all the other attributes on which modernity itself had been built, to do so? Yet, as Jonathan Freedland (2016) writes, 'evidence, facts and reason are the building blocks of civilization. Without them we plunge into darkness.' And as this darkness falls, so it brings with it the end of Reason and all its light.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Bauman, Z. (2000). *Liquid Modernity*. Cambridge: Polity Press.
- Bauman, Z. (2001). Violence in the age of uncertainty. In A. Crawford (Ed.), *Crime and Insecurity* (pp. 52–74). London: Routledge.
- Beccaria, C. (1872). *On Crimes and Punishments*. Albany, NY: W.C. Little & Co. (Original work published in 1764)
- Beck, U. (1992). *Risk Society: Towards a New Modernity*. London: Sage.
- Beetham, D. (1991). *The Legitimation of Power*. Basingstoke: Macmillan.
- Betz, H.G. (1994). *Radical Right-Wing Populism in Western Europe*. Basingstoke: Macmillan.
- Beveridge, W.H. (1942) *Social Insurance and Allied Services: Report [The Beveridge Report]*. London: HMSO. [Cmd. 6404]
- Bottoms, A.E. (1977). Reflections on the Renaissance of Dangerousness. *Howard Journal of Criminal Justice*, 16, 70–96.
- Bottoms, A.E. (1995). The philosophy and politics of punishment and sentenc-

- ing. In C. Clarkson & R. Morgan (Eds), *The Politics of Sentencing Reform* (pp. 17–49). Oxford: Clarendon Press.
- Canovan, M. (1981). *Populism*. New York, NY: Harcourt Brace Jovanovich.
- Clark, D. (1991). Guidance, counselling, therapy: Responses to ‘marital problems’ 1950–90. *The Sociological Review*, 39(4), 765–798.
- Commonwealth of Australia (1945). *Full Employment in Australia*. Canberra: Australian Government Printer.
- Diderot, D. (1753/1966). On the interpretation of Nature, No. 15. In L. Crocker (Ed.), *Diderot’s Selected Writings*. New York, NY: Macmillan. (Original work published 1753)
- Diderot, D. (1967). *Denis Diderot’s The Encyclopedia: Selections*. (S.J. Gendzier, Ed. & Trans.). New York: Harper Torchbooks. (Original work published 1751)
- Eliot, T.S. (1943). *Four Quartets*. New York, NY: Harcourt, Brace & Co.
- Farrell, G., Tilley, N. & Tseloni, A. (2014). Why the crime drop? *Crime and Justice*, 43(1), 421–490.
- Freedland, J. (2016, November 9). The US has elected its most dangerous leader. We all have plenty to fear. *The Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/09/donald-trump-us-president-nightmare>
- Garland, D. (1996). The limits of the sovereign state: Strategies of crime control in contemporary society. *British Journal of Criminology*, 36, 445–471.
- Giddens, A. (1991). *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Cambridge: Polity Press.
- Giddens, A. (1999). Risk and responsibility. *Modern Law Review*, 62(1), 1–10.
- Goode, E. (2013, July 25). US prison populations decline, reflecting new approaches to crime. *The New York Times*. Retrieved from <http://www.nytimes.com/2013/07/26/us/us-prison-populations-decline-reflecting-new-approach-to-crime.html>
- Gray, J. (1993). *Beyond the New Right: Markets, Government and the Common Environment*. London: Routledge.
- Hall, S. (1979). *Drifting into a Law and Order Society*. London: Cobden Trust.
- Hall, S. (1988). *The Hard Road to Renewal: Thatcherism and the Crisis of the Left*. London: Verso.
- Hall, S., Critcher, C., Jefferson, T., Clarke, J. & Roberts, B. (1978) *Policing the Crisis. Mugging, the State and Law and Order*. New York, NY: Palgrave Macmillan.
- Haney, L. (2016). Prisons of the past: Penal nationalism and the politics of punishment in central Europe. *Punishment & Society*, 18(3), 346–368.
- Hastings, M. (2013, July 10). The danger is we’ve become immune to human rights

- lunacy. It's vital we stay angry, says Max Hastings. *Daily Mail*. Retrieved from <http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2359048/The-danger-weve-immune-Human-Rights-lunacy-Its-vital-stay-angry-says-MAX-HASTINGS.html>
- Hay, D. (1976). Property, authority and the criminal law. In D. Hay, P. Linebaugh & E.P. Thompson (Eds.), *Albion's Fatal Tree: Crime and Society in 18th Century England* (pp. 17–63). London: Allen Lane.
- Home Office. (1959). *Penal Practice in a Changing Society*. London: HMSO. [Cmnd. 645]
- Home Office. (1988). Punishment, Custody and the Community. London: HMSO. [Cm 424]
- Howard, C. & Morris, N. (1964). *Studies in Criminal Law*. London: Oxford University Press.
- Howard, E. (1946). *Garden Cities of To-morrow*. London: Faber & Faber.
- Jewkes, Y. (2004). *Media and Crime*. London: Sage.
- Johnson, D.T. (2006). Japan's secretive death penalty policy: Contours, origin, justifications, and meanings. *Asia-Pacific Law & Policy Journal*, 7, 62–124.
- Jones, T. & Newburn, T. (2006). *Policy Transfer and Criminal Justice*. London: Open University Press.
- Kant, I. (1797/1887). *The Philosophy of Law: An Exposition of the Fundamental Principles of Jurisprudence*. (W. Hastie, Trans.). Edinburgh: T & T Clark.
- Koo, K.C., Ahn, J.H., Hong, S.J., Lee, J.W., & Chung, B.H. (2014). Effects of chemical castration on sex offenders in relation to the kinetics of serum testosterone recovery: Implications for dosing schedule. *Journal of Sexual Medicine*, 11(5), 1316–1324.
- Kynaston, D. (2007) *Austerity Britain, 1945–51*. London: Bloomsbury.
- Lacey, N. (2008). *The Prisoners' Dilemma: Political Economy and Punishment in Contemporary Democracies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Locke, John (1690/2016). *Second Treatise of Government*. Los Angeles, CA: Enhanced Media.
- Marsh, L. (1943). *Report on Social Security for Canada [The Marsh Report]*. Ottawa: King's Printer.
- Marshall, T.H. (1950). *Citizenship and Social Class*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Marwick, A. (1971). *The Explosion of British Society, 1914–1970*. London, Macmillan.
- Miao, M. (2013). Capital punishment in China: A populist instrument of social governance. *Theoretical Criminology*, 17(2), 233–250.
- Montesquieu, C. (1914/2011) *The Spirit of Laws* (T. Nugent, Trans.). New York, NY: Cosimo Classics.

- Müller, M-M. (2012). The rise of the penal state in Latin America. *Contemporary Justice Review*, 15(1), 57–76.
- Mumford, L. (1945) *City Development: Studies in Disintegration and Renewal*. New York, NY: Harcourt, Brace & Co.
- Neto, L. (2009). El Populismo Punitivo En Espana: del estado The penal populism in Spain: from welfare state to punishment state. http://www2.pucpr.br/sss-cla/papers/SessaoC_A33_pp219-245.pdf
- Nevitte, N. (1996). *The Decline of Difference: Canadian Value Change in Cross National Perspective*. Peterborough, ON: Broadview Press.
- New Zealand First. (2014). *Manifesto*. Wellington: Government Printer.
- Packer, G. (2016, October 31). Hillary Clinton and the populist revolt, *New Yorker Magazine*. Retrieved from <http://www.newyorker.com/magazine/2016/10/31/hillary-clinton-and-the-populist-revolt>
- Paine, T. (1794). *The Age of Reason: Being an Investigation of True and Fabulous Theology*. Paris: Barrois.
- Pratt, J. & Clark, M. (2005). Penal populism in New Zealand. *Punishment and Society*, 7, 303–322.
- Pratt, J. (1997). *Governing the Dangerous*. Sydney: Federation Press.
- Pratt, J. (2000). Emotive and ostentatious punishment. *Punishment & Society*, 2(4), 417–439.
- Pratt, J. (2007). *Penal Populism*, New York, NY: Routledge.
- Pratt, J. (2008). *When Penal Populism Stops. Legitimacy, Scandal and the Power to Punish in New Zealand*. Australian and New Zealand Journal of Criminology 41, 364-383.
- Pratt, J. (2016). Risk control, rights and legitimacy in the limited liability state. *British Journal of Criminology*, Advance online publication. doi:10.1093/bjc/azw065
- Putnam, R. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York, NY: Simon and Schuster.
- Rawnsley, A. (2016a, November 20). The shock lessons for liberals from Brexit and the Trumpquake. *The Observer*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/20/lessons-liberals-brexit-trumpquake-demagogues-rules-electoral-politics>
- Rawnsley, A. (2016b, June 26). Brexit: A Journey into the unknown for a country never before so divided, *The Observer*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jun/26/brexit-eu-referendum-disunited-kingdom>

- Reiner, R. (2001). The rise of virtual vigilantism: Crime reporting since World War II, *Criminal Justice Matters*, 43, 4–5.
- Report of the Penal Policy Review Committee, 1981. (1982). Wellington, NZ: Government Printer.
- Roberts. J.V., Stalans, L., Indermaur, D. & Hough, M. (2003). *Penal Populism and Public Opinion*. New York, NY: Oxford University Press.
- Ruggles-Brise, Sir E. (1921). *The English Prison System*. London: Macmillan.
- Shils. E. (1956). *The Torment of Secrecy*. London: Heinemann.
- Standing, G. (2014). *The Precariat. The New Dangerous Class*. London: Bloomsbury.
- Tappan, P. (1957) Sexual offences and the treatment of sexual offenders in the United States. In L. Radzinowicz (Ed.), *Sexual Offences. A Report of the Cambridge Department of Criminal Science* (pp. 500-516), London: Macmillan.
- Tyler, T. & Boeckmann, R. (1997). Three strikes and you are out, but why? The psychology of public support for punishing rule breakers. *Law and Society Review*, 31: 237–265.
- von Hirsch, A. (1976). *Doing Justice*. New York, NY: Hill & Wang.
- Wolffe, R. (2016, November 9). Trump's victory is nothing short of a revolution, *The Guardian*, Retrieved from <https://www.theguardian.com/commentis-free/2016/nov/09/donald-trump-victory-us-election-result-revolution>
- Zimring, F.E. (2012). *The City that became Safe: New York's Lessons for Urban Crime and its Control*. New York, NY: Oxford University Press.